Popularidad presidencial y éxito o derrota del partido en el gobierno. El caso de Chile

Presidential popularity and success or defeat of the party in government. The case of Chile.

Orestes Enrique Díaz Rodríguez*

Fecha de recepción: 24-11-19
Fecha de aceptación: 10-06-20

RESUMEN: Sigelman (1979), Lewis Beck y Rice (1982) y Brody y Sigelman (1983) comprobaron que para el caso estadounidense, la popularidad del mandatario de turno tiene la capacidad de anticipar el éxito o derrota del candidato presidencial del partido en el gobierno. Echegaray (1996) reportó que la asociación también tendía a ser consistente en los comicios presidenciales latinoamericanos. Sin embargo, en relación con la experiencia comparada en América Latina quedó pendiente de esclarecer otro enigma crucial: ¿por qué razón en la mayoría de los casos la popularidad del presidente de turno es capaz de anticipar el éxito o la derrota del partido en el gobierno, mientras en otros, no lo hace? La experiencia

* Profesor asociado en la Universidad de Guadalajara. Analista Político. Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Guadalajara. Miembro del SNI. Línea de Investigación: Popularidad presidencial y éxito o derrota del partido en el gobierno en América Latina. Contacto: diazrguez@hotmail.com

chilena posterior a la transición democrática arroja pistas en esa dirección. El análisis de los comicios presidenciales de 1999-2000 y 2009-2010, únicos efectuados en ese país en los que no fue consistente la relación entre popularidad del ejecutivo de turno y el éxito o la derrota del partido en el gobierno, permite la identificación de dos factores con capacidad de anular la asociación entre esas variables. Cuando el mandatario de turno goza de una alta aprobación, la división interna del oficialismo durante la campaña puede condicionar su derrota electoral y contrarrestar la capacidad anticipativa de la popularidad presidencial. A su vez, cuando la aprobación del gobernante de turno es baja, el hecho de que la oposición no constituya una opción creíble de gobierno puede favorecer que el oficialismo retenga el poder anulando también el potencial predictivo de la aprobación presidencial. Para el análisis de ambos casos con base en la revisión de fuentes teóricas, documentación empírica y la consulta de manera amplia de textos de académicos locales y regionales que conocen a profundidad el trasfondo de la dinámica de los comicios presidenciales en Chile, formulamos las hipótesis pertinentes y definimos los indicadores que permitieron comprobar la veracidad de nuestros supuestos. La originalidad de la investigación reside en que el problema abordado no se encuentra resuelto en la literatura sobre el tema.

Palabras clave: Poder Ejecutivo, Popularidad Presidencial, Capacidad Anticipativa, División Interna del Partido en el Gobierno, Oposición no es Creíble.

SUMMARY: Sigelman (1979), Lewis Beck and Rice (1982), as well as Brody and Sigelman (1983) found that, for the American case, the popularity of the incumbent on duty has the ability to anticipate the success or defeat of the party's presidential candidate in government. Echegaray (1996) reported that the association also tended to be consistent in the Latin American presidential elections. However, in relation to the comparative experience in Latin America was left to clarify another crucial conundrum: why in most cases the popularity of the president in turn is able to anticipate the success or defeat of the party in government, while in others, does it not? Chile's post-democratic experience yields clues in that direction. The analysis of the presidential elections of 1999-2000 and 2009-2010, the only ones carried out in that country

in which the relationship between the popularity of the executive of turn and the success or defeat of the party in the government was not consistent, allows the identification of two factors capable of nullifying the association between those variables. When the incumbent's office is highly approved, the internal division of officialism during the campaign can condition his electoral defeat and counter the anticipatory capacity of presidential popularity. In turn, when the approval of the incumbery never is low, the fact that the opposition does not constitute a credible government option may encourage officialism to retain power by also nullifying the predictive potential of presidential approval. For the analysis of both cases, based on the review of theoretical sources, empirical documentation and the extensive consultation of texts of local and regional academics who know in depth the background of the dynamics of the presidential elections in Chile, we formulate the relevant assumptions and define the indicators that allowed us to verify the veracity of our assumptions. The originality of the research is that the problem addressed is not solved in the literature on the subject.

Key words: Executive Power, Presidential Popularity, Anticipatory Capacity, Internal Division of the Party in Government, Opposition is not Credible.

Introducción

Aunque la popularidad presidencial se mide desde los años 30 del siglo XX y hasta la actualidad sigue una redacción bastante modelada **(¿En general, usted aprueba o desaprueba el trabajo que está haciendo el presidente?),** fue a inicios de la década de los años 70 que los politólogos la definimos conceptualmente. "El término aprobación presidencial contiene, la opinión individual o agregada, sobre la gestión de un mandatario en general, sin énfasis primario en algún tema o cuestión electoral" (Muller, 1973). Sin embargo, durante la mayor parte de la década de los años 70 bajo la influencia de la teoría de Mueller, se negaba que la aprobación del mandatario de turno (popularidad) pudiera guardar relación con las probabilidades de reelección de los presidentes (Lewis Beck y Rice, 1982).

Hacia el último año de la década de los setenta surgieron los primeros indicios de que el enfoque comenzó a variar. En efecto, Lee Sigelman (1979) alertó que el nivel de aprobación del gobernante de turno tenía la capacidad de predecir la posibilidad de su reelección por lo que la visión que defendía Muller podía ser falsa. Cuatro años más tarde, en colaboración con Brody (1983), Sigelman documentó que la popularidad del mandatario también permitía anticipar la victoria o derrota del candidato presidencial del partido en el gobierno, aunque éste no fuera el titular del poder ejecutivo. Los hallazgos fueron confirmados por Lewis Beck y Rice (1982 y 1984).

En la medida en que la democratización avanzó en América Latina, las contribuciones de esos autores también promovieron la interrogante sobre si la capacidad anticipativa de la popularidad presidencial también era factible comprobarla en los comicios presidenciales de la región. Echegaray (1996) se encargó de despejar la incógnita. El autor investigó las elecciones presidenciales latinoamericanas de 1982 a 1994 encontrando que "es la evaluación de la labor del presidente más que cualquier experiencia económica específica lo que emerge como el mejor predictor de cuan bien el candidato del oficialismo saldrá parado en la elección" (Echegaray, 1996: 610). Para Echegaray los electorados latinoamericanos evalúan a sus mandatarios con varios criterios en mente, no se limitan a aquellos de naturaleza económica. Dicho con otras palabras, el liderazgo presidencial del oficialismo emerge como un factor políticamente autónomo y se encuentra lejos de quedar agotado por las habilidades macroeconómicas del gobierno (Echegaray, 1996: 612).

En la actualidad, los investigadores no dudan en cuanto a que el desempeño del presidente en turno constituye un buen anticipador de su votación cuando busca la reelección. De acuerdo con Romero (2009) la evidencia empírica parece corroborar esta afirmación, a desempeños bien evaluados regularmente siguen reelecciones. Cuando hay buenos resultados, es muy probable que quien encabeza el Ejecutivo tenga ventajas (Romero, 2009: 4). Al mismo tiempo, se reconoce que tiende a producirse también un proceso de transferencia de la popularidad del pre-

sidente de turno en votos para el candidato presidencial de su partido, aunque la responsabilidad recaiga en una persona diferente[1].

Por último, la constatación empírica arrojó que en la mayoría predominante de los casos cuando los mandatarios de turno latinoamericanos cuentan con una aprobación alta, el partido o coalición de gobierno logra imponerse en los comicios presidenciales, o viceversa, cuando el desempeño de los mandatarios de turno muestra una aprobación baja o insatisfactoria el partido de gobierno es desplazado del poder (Díaz, 2019 y 2019a)[2].

Sin embargo, otro enigma también decisivo atrae la atención: ¿por qué razón en la región existen casos en que una alta aprobación del ejecutivo de turno no fue seguida por el éxito electoral del partido o coalición de gobierno o en los que la baja aprobación del mandatario no condujo a la derrota del oficialismo? Esto es, "¿por qué en algunas elecciones importa más la aprobación presidencial para definir el voto que en otras?" (Romero, 2009: 6).

Partiendo de la premisa de que en América Latina el vínculo entre la popularidad presidencial y el éxito o la derrota del partido o coalición de gobierno es consistente, el propósito de la investigación fue identificar aquellos factores que en el caso chileno han demostrado capacidad para anular esa asociación. La selección de casos de este país responde a que su serie temporal de elecciones presidenciales competitivas, sin tomar

1 Gramacho (2007:17) también reportó que la comparación entre el desempeño del candidato oficial y la aprobación del gobierno en encuestas de opinión pública "sugiere una fuerte asociación positiva. No sólo los presidentes suelen recibir porcentajes de votos semejantes a su nivel de aprobación, sino que los candidatos oficialistas tampoco se alejan mucho de ese marco".

2 Por mayoría predominante de los casos se entiende una coincidencia entre las variables independiente y dependiente superior a las dos terceras partes de los casos (67%+1), que abre la puerta a que pueda ser identificada como eventual pauta del comportamiento electoral. En ese sentido, Díaz (2019) con base en el análisis de una muestra de treinta y ocho comicios presidenciales celebrados en siete países de la región (Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, Costa Rica y México) comprobó que en el 89.47% de los casos una baja aprobación (popularidad) del gobernante de turno fue seguida por la derrota del partido o coalición de gobierno, mientras una alta aprobación fue seguida por el éxito del oficialismo.

en cuenta la elección fundacional de 1989[3], es una de las más nutridas y estables del continente contando con seis comicios presidenciales.[4] Como puede apreciarse en el Cuadro n.1, en cuatro de esos seis comicios la asociación entre popularidad presidencial y el éxito o derrota del partido en el gobierno se consumó. Significa que la asociación entre nuestras variables dependiente e independiente fue consistente en los comicios presidenciales celebrados en ese país en 1993, 2005-2006, 2013-2014 y 2018-2019. En cambio, en dos elecciones presidenciales el vínculo no se produjo. En ese sentido, en este trabajo analizamos los dos casos que se reportan en Chile de no consistencia entre la popularidad del gobernante de turno y el éxito o derrota del partido en el gobierno, los comicios presidenciales de 1999-2000 y 2009-2010[5].

3 Para efectos de la presente investigación no se toman en cuenta los resultados de la elección presidencial chilena de 1989 que marcó el inicio de la transición democrática en ese país, debido a que no podemos considerar confiables las mediciones de la opinión pública realizadas en el contexto del régimen autoritario encabezado por el general Augusto Pinochet. De acuerdo con Sartori (1992) en determinados regímenes políticos es imprescindible diferenciar entre opinión "en el público" y opinión "del público".

4 La serie temporal de comicios presidenciales en Chile a la que hacemos referencia abarca, por consiguiente, las elecciones celebradas en 1993, 1999-2000, 2005-2006, 2009-2010, 2013-2014 y 2018-2019.

5 No se analizan los comicios presidenciales chilenos de 1993, 2005-2006, 2013-2014 y 2018-2019 porque en ellos sí se produjo la asociación entre la popularidad presidencial y el éxito o la derrota del partido en el gobierno. Significa que una alta popularidad del ejecutivo fue seguida por el triunfo del oficialismo, mientras una baja aprobación por la derrota. Partimos de la premisa de que Echegaray (1996) y Díaz (2019) reportaron que la asociación entre nuestras variables dependiente e independiente tiende a ser consistente para el caso latinoamericano, por lo que el propósito es intentar identificar en los casos no consistentes los factores con capacidad de anular la asociación.

Cuadro 1. Asociación entre popularidad presidencial y éxito o derrota del partido en el gobierno en Chile

Presidente	Período	Popularidad	Candidato presidencial oficialista	Resultado del oficialismo	Tipo de asociación
Patricio Aylwin	1990 / 1994	53%	Eduardo Frei Ruiz-Tagle	Ganador	Consistente
Eduardo Frei Ruiz-Tagle	1994 / 2000	28%	Ricardo Lagos	Ganador	Inconsistente
Ricardo Lagos	2000 / 2006	61%	Michelle Bachelet	Ganador	Consistente
Michelle Bachelet	2006 / 2010	78%	Eduardo Frei Ruiz-Tagle	Perdedor	Inconsistente
Sebastián Piñera	2010 / 2014	31%	Evelyn Matthei	Perdedor	Consistente
Michelle Bachelet	2014 / 2018	22%	Alejandro Guillier	Perdedor	Consistente

Fuente: Elaboración propia con información de encuestas de Opinión Pública de CEP.

El primer caso corresponde con los comicios presidenciales de 1999-2000, en los que la baja popularidad del mandatario de turno Eduardo Frei Ruiz-Tagle (28%) no fue seguida por la derrota electoral de la coalición de gobierno. En tanto, el segundo se refiere a las elecciones presidenciales de 2009-2010 donde la dinámica fue totalmente inversa. La alta popularidad de la mandataria de turno Michelle Bachelet (78%) no fue seguida por el éxito sino por la derrota del oficialismo. Chile, desde el inicio de la transición democrática (1989) hasta el momento de realizar esta investigación, no sufrió de interrupciones de mandatos constitucionales.

Para el análisis del caso de los comicios presidenciales de 1999-2000, donde el oficialismo logró conservar el poder pese a que la aprobación del gobernante de turno era baja o insatisfactoria, la hipótesis que se formuló fue que la baja popularidad del gobernante de turno no impide al partido en el gobierno retener el poder, siempre que se cumpla la condición de que la oposición no constituya una opción de gobierno creíble. En un sistema político de carácter democrático el principal partido o coalición opositora no es creíble cuando sus declaraciones políticas, incluidas las de su campaña previa a las elecciones, no sirven para prever con exactitud su comportamiento posterior (Downs, 1973)[6]. Significa que en el imaginario político, la oposición enfrenta el rechazo de la mayoría de los votantes a ser considerada fuerza gubernamental alternativa de carácter nacional. Cuando la oposición no es creíble, el candidato del partido o coalición de gobierno se sitúa en una situación de ventaja crucial desde antes de iniciarse la campaña, incluso a contrapelo de la baja aprobación del gobernante saliente. Los indicadores que a nuestro

6 Los partidos formulan propuestas políticas para ganar las elecciones; no tratan de ganar las elecciones para realizar propuestas políticas. Pero a su vez, el votante racional sabe que ningún partido será capaz de hacer todo cuanto dice que hará. Por tanto, el votante toma los resultados del partido en el gobierno en el período que finaliza como indicador de lo que hará en el futuro y estima los resultados que el partido de oposición habría conseguido en el período que concluye de haber ocupado el poder (Downs, 1973). Lo que tienen en común ambas operaciones es que establecen una diferencia prudencial entre las promesas de campaña que hacen los partidos políticos y lo que en realidad alcanzarán a cumplir una vez en el gobierno. Mientras los partidos hacen promesas, los votantes estiman cuanto pueden alcanzar a cumplir de lo que prometen. En ese sentido, un partido de oposición no es creíble cuando el votante racional estima que no alcanzará a cumplir no con una parte de lo que promete, sino con el corazón o la parte más sustancial de su oferta política.

juicio reflejan de manera fehaciente que la oposición no es creíble son, cuando menos, dos: 1) Los líderes opositores que, si bien han declarado respetar la institucionalidad democrática, ocuparon puestos de responsabilidad durante el régimen no democrático anterior y se les asocia responsabilidad directa o indirecta con la prolongación de esa experiencia autoritaria relativamente reciente. Por experiencia autoritaria relativamente reciente, entendemos el escenario en que, después del retorno a la democracia en el país, todavía no han tenido acceso al control del poder ejecutivo nacional las fuerzas políticas que colaboraron con el régimen no democrático, formando incluso directamente parte de sus gobiernos. 2) Igualmente, la oposición también presenta un problema de falta de credibilidad ante la mayoría de los ciudadanos racionales, cuando no posee experiencia de gobierno a nivel nacional y procede de alguno de los extremos del espectro ideológico desde donde defendió posturas antisistema. Para el caso de las elecciones presidenciales chilenas de 1999-2000, el análisis de caso comprueba la presencia del primer supuesto a partir de la consulta amplia de textos de académicos locales y regionales que conocen a profundidad el trasfondo de la dinámica de los comicios presidenciales en Chile.

En el caso de los comicios presidenciales de 2009-2010, donde el oficialismo no alcanzó a retener el poder pese a que era alta la popularidad de la mandataria de turno, Michelle Bachelet (78%) y donde fue evidente que se inhibió el proceso de transferencia de la popularidad del gobernante de turno en votos para el candidato presidencial del oficialismo, nuestra hipótesis fue que si la participación del oficialismo en la contienda electoral se encuentra afectada por un proceso de división interna manifiesta u oculta, entonces el partido o coalición de gobierno no retendrá el poder pese a que el mandatario de turno cuente con una alta popularidad. La división del partido o coalición de gobierno refleja una fractura o desunión de esa fuerza política en el momento de enfrentar los compromisos electorales, especialmente los comicios presidenciales (Panebianco, 1986). Manifiesta la falta de solución de conflictos internos de la organización que afloran durante la propia contienda electoral comprometiendo el propósito de conservar el poder. La división del partido o coalición de gobierno es manifiesta si, durante la campaña electoral, el proceso de fractura que afecta a la organización es incapaz de ser

contenido por sus estructuras y se convierte en objeto indiscutido de dominio para el grueso de la opinión pública, debido a que se reportan de forma más o menos sistemática evidencias concluyentes al respecto. Los indicadores que consideramos reflejan de manera fehaciente la existencia de una división interna en el partido o coalición gubernamental son: 1) La desaprobación pública del proceso de selección del candidato presidencial del partido o coalición de gobierno por líderes, legisladores o altos funcionarios pertenecientes al propio partido o coalición gubernamental. 2) El abandono del partido o coalición de gobierno por los referentes señalados que, a su vez, crean o se integran a fuerzas electorales alternativas para competir en la elección presidencial, desde las que abiertamente manifiestan una visión crítica del desempeño gubernamental. Para el caso de las elecciones presidenciales chilenas de 2009-2010 el análisis de caso comprueba la presencia de ambos supuestos.

Por consiguiente, en el análisis de ambos casos inicialmente formulo la hipótesis pertinente, defino sus conceptos clave, así como los indicadores que me ayudaron a comprobar o refutar su veracidad con base en la revisión de literatura y documentación empírica relacionada con esas experiencias. A su vez reporto la consulta de manera amplia de textos de académicos locales y regionales que conocen a profundidad el trasfondo de la dinámica de los comicios presidenciales donde no se reportó consistencia entre las variables popularidad presidencial y éxito o derrota del partido o coalición en el gobierno.

El análisis de los comicios presidenciales de 1999-2000 y 2009-2010 arrojó que, para el caso de la experiencia chilena, cuando la popularidad del mandatario de turno fue baja, la razón que posibilitó la retención del poder por el oficialismo es que la oposición no constituía una opción de gobierno creíble. En cambio, cuando la aprobación del presidente fue alta, el factor que permite explicar la derrota del partido o coalición de gobierno en los comicios presidenciales fue la división interna de esa fuerza política en el momento de encarar la campaña electoral. Como consecuencia, ambos factores se erigen como determinantes para explicar la inconsistencia en la asociación entre popularidad presidencial y éxito o derrota del partido en el gobierno en ese país. Este hallazgo tiene las siguientes repercusiones. Por una parte, confirma la capacidad

explicativa de la concepción de Downs (1973) sobre las implicaciones negativas que tiene para los partidos de oposición no constituir una opción de gobierno creíble; y también la de Panebianco (1986) referente a la importancia de la cohesión interna de los partidos. Por otra parte, la identificación de factores con capacidad de anular la asociación entre popularidad presidencial y el éxito o derrota del partido o coalición de gobierno en un país de la región puede abrir la puerta a futuras comprobaciones empíricas de su validez en la experiencia comparada de otros países de América Latina.

Marco teórico

La popularidad presidencial, como juicio individual o colectivo no asociado a un tema en específico o asunto electoral, que resume lo que la mayoría piensa del desempeño del gobierno, constituye una medición y un indicador del estado de la opinión pública. Habermas (1998) interpreta la opinión pública como un proceso deliberativo que involucra ciudadanos atentos a los asuntos públicos y participantes activos de la vida democrática en sus sociedades, En cambio, para Bourdieu (1972) la opinión pública no existe. La concepción de Sartori (1992) respecto a la opinión pública como "un público o multiplicidad de públicos, cuyos estados mentales difusos (opiniones) interactúan con los flujos de información sobre el estado de la cosa pública" (Sartori, 1992: 171), es la que resulta decisiva para una comprensión más profunda del fenómeno de la popularidad presidencial. Especialmente, si incorporamos al análisis ciertos rasgos de la opinión pública destacados también por el académico italiano: 1) la opinión es doxa, no es episteme, no es saber o ciencia. 2) Es de constitución variopinta debido a resultar un producto de la mezcla entre los ingredientes de cualquier estado mental (necesidades, valores, disposiciones) con datos sobre cómo se gestiona la cosa pública. 3) Se le suele considerar autónoma, pero en determinados regímenes políticos constituye un asunto crucial distinguir entre opinión *en* y *del* público. 4) De ninguna manera se forma sola por sí misma, sino que en el origen de las opiniones difusas están siempre pequeños grupos difusores. 5) Existe un nexo constituyente entre la opinión pública y la

democracia, pues la primera es el fundamento esencial operativo de la segunda.

Por otra parte, diversos autores han expresado reservas apuntando a la proclividad de que las encuestas produzcan mensajes ambiguos, debido a la falta de información o conocimientos de los encuestados (Converse, 2006) o las deficiencias de los instrumentos empleados (Bourdieu, 1972; Zaller, 2014). Sin embargo, sus resultados a nivel agregado tienden a corresponder de forma aceptablemente precisa con el contexto real demostrando estabilidad a lo largo del tiempo (Page y Shapiro, 2010). Trasladar la conclusión de Page y Shapiro al fenómeno concreto de la popularidad presidencial, significa que a nivel agregado la medición tiende a reflejar de forma aceptablemente precisa lo que los ciudadanos piensan con respecto a la gestión que los mandatarios hacen de la cosa pública.

Gramacho (2007), consideró necesario distinguir dos dimensiones de la popularidad: la popularidad del gobierno en las urnas y la popularidad del gobierno en las encuestas de opinión pública. Según el autor, la popularidad de un gobierno en las urnas determina si un partido o coalición seguirá controlando el Ejecutivo, o si será desplazado a la oposición, mientras la popularidad de un gobierno en las encuestas no es propiamente electoral. El autor concluye la reflexión sobre las dos dimensiones de lo que denomina popularidad gubernamental, reconociendo que aunque distinguibles conceptualmente y empíricamente, las dos dimensiones de la popularidad de los gobiernos se encuentran muy asociadas. Los ciudadanos no tienden a aprobar en las urnas, gobiernos cuya gestión reprueban en la encuestas de opinión pública (Gramacho, 2007: 16).

Gramacho (2007) emplea popularidad gubernamental como sinónimo de popularidad presidencial. En general, el asunto puede ser enfocado así, pero no sin antes alertar que, en la práctica, podemos encontrarnos con que se trata de dos mediciones completamente diferentes. Una revisión de la literatura conduce a constatar que, en países como Argentina y Chile, la popularidad gubernamental o del gobierno va referida a la medición del nivel de aprobación de la gestión del gabinete del presidente diferenciándola, por tanto, de la del propio mandatario.

Esa especificidad puede dar lugar a que exista una diferencia porcentual importante en los niveles de aprobación de uno y de otro[7]. La diferencia entre popularidad gubernamental y popularidad presidencial se establece cuando la casa encuestadora acostumbra a preguntar a sus entrevistados separadamente sobre la aprobación al gobierno y al presidente. Así contamos con dos niveles de aprobación. Esta forma de preguntar no es la habitual y claramente busca establecer si existe una evaluación diferenciadora por parte de la ciudadanía entre el desempeño del mandatario y el de su equipo político. Sin embargo, como regla, la popularidad del presidente mide la gestión del mandatario y su gobierno como un todo único. Precisamente, esa dimensión no desdoblada, es la que es objeto de estudio en la literatura y, por supuesto, también en la presente investigación[8].

La revisión de la literatura arroja también que popularidad y aprobación presidencial habitualmente son empleados como sinónimos. La aprobación del gobierno es la medida más antigua de popularidad presidencial. "Con mucho, la mayoría de los estudios utilizan datos de encuestas recopilados por la compañía Gallup. Desde agosto de 1937 la pregunta de la encuesta dice lo siguiente: Usted aprueba o desaprueba la forma en que (nombre del presidente) está conduciendo el gobierno" (Berlemann y Enkelmann, 2014: 13). Lo que distingue la medición de la aprobación es que la manera en que se formula la pregunta está concebida para que principalmente dé lugar a dos opciones de respuesta: aprobación o rechazo. Este instrumento es el más estable y el más utilizado para estudios de popularidad presidencial (Cohen, 1999; Gronke y Newmann, 2000).

7 Por ejemplo, Navia y Morales (2007), analizaron las causas de la diferencia de nueve puntos porcentuales entre la evaluación del desempeño del gobierno y el nivel de aprobación de la gestión de Michelle Bachelet.

8 En favor de esa perspectiva hay que recordar como Sartori (2003), en su análisis del sistema presidencial parte de reconocer como uno de los tres criterios básicos que definen a ese tipo de régimen, que el presidente nombra y dirige su propio gabinete. "Los gobiernos son una prerrogativa presidencial: es el presidente el que a su discreción nombra o sustituye a los miembros del gabinete" (Sartori, 2003: 98). Por consiguiente, en última instancia, es responsabilidad del mandatario cuando las diferencias entre su propia evaluación y la que alcanza su gabinete resultan relevantes.

Un indicador muy cercano al de popularidad presidencial es el de evaluación presidencial. La principal diferencia entre popularidad y evaluación presidencial reside en la escala de respuestas disponibles para los individuos (De Paula, 2013: 37). De acuerdo con el autor, la evaluación del presidente permite al entrevistado manejar un número mayor de respuestas posible, en cualquiera de las dos formas o versiones en que tiene lugar, cuantitativa o cualitativa. En su fórmula cuantitativa se pide al entrevistado que atribuya al presidente una calificación en una escala que va de 0 hasta 100, mientras en la versión cualitativa, el entrevistado es preguntado cómo evalúa el desempeño de un presidente específico teniendo cinco posibilidades de respuesta: óptimo, bien, regular, mal y pésimo. En el segundo caso se arriba a un índice numérico a través de la suma de los porcentajes de respuesta ubicadas en las categorías de óptimo y bien, que representan el nivel de evaluación positiva atribuida al gobierno.

Por último, otro concepto que guarda cierta proximidad con el de popularidad presidencial es el de confianza en el gobierno, cuyo contenido va dirigido a captar si el entrevistado confía o no en el poder ejecutivo más allá de que apruebe o no la gestión. Se trata de una medición menos generalizada en la que no se encuentran muchos estudios que exploren si la relación entre aprobación y confianza es unívoca, y cuando no lo es, qué razones podrían explicar la desconexión. Para De Paula (2013) se trata de un instrumento menos adecuado, una vez que la confianza es un concepto extremadamente subjetivo.

Que la popularidad del presidente se mida a través de una pregunta sencilla realizada a una muestra representativa de ciudadanos (¿En general usted aprueba o desaprueba el trabajo que está haciendo el presidente?), no significa que su composición también lo sea. En la literatura, por ejemplo, se han identificado tres componentes principales de la aprobación: 1) el desempeño; 2) la personalidad; 3) y el partidismo (Romero, 2009: 8).

El desempeño constituye el componente indiscutido de la aprobación y, por consiguiente, también el más ampliamente investigado (Mueller, 1973; Brody, 1991; Buendía, 1996; Lewis-Beck y Stegmaier, 2000; Stimson, 2004; Magaloni, 2006). Dentro del desempeño, la economía ha sido el objeto privilegiado de atención, sin menoscabar que también se le ha asociado con asuntos coyunturales como guerras o con la importancia

de ciertos temas en la agenda. Por su parte, la personalidad tiene en cuenta aspectos como el magnetismo o carisma, la forma de interactuar con el público (Kernell, 2006) y el estilo de gobernar (Neustadt, 1991). Aunque los autores señalados insistieron en explicar la aprobación por intermedio de las denominadas variables personalistas, la postura ha sido considerada insostenible por King (1993) para el caso norteamericano y por Romero (2000) para el caso mexicano. Como tercer componente destaca la predisposición a aprobar la gestión del mandatario si milita o representa al mismo partido con el que se simpatiza; es decir, los ciudadanos más proclives a aprobar al mandatario son aquellos que se identifican con el partido del presidente. "Quienes se identifican con el partido del presidente tenderán a evaluarlo mejor que quienes simpatizan con partidos de la oposición o se consideran independientes o apartidistas" (Somuano, 2018: 661).

John E. Mueller (1970), en su estudio primario sobre la popularidad presidencial, describe del siguiente modo el origen del término:

> Con una tenaz regularidad en las últimas dos décadas y media, el grupo de Gallup ha planteado a sus muestras transversales del público estadounidense la siguiente consulta: ¿Aprueba o desaprueba la forma en que (el titular) está manejando su trabajo como presidente? Las respuestas a esta pregunta curiosa forman un índice conocido como popularidad presidencial (Mueller, 1970).

Para Mueller (1973), "el término aprobación presidencial contiene, la opinión individual o agregada, sobre la gestión de un mandatario de manera general, sin énfasis primario en algún tema o cuestión electoral". El señalamiento destaca las características del indicador que pueden contribuir a explicar el amplio uso que ha tenido como "brújula" por parte principalmente de los políticos y luego, como objeto persistente de investigación por los académicos. Se trata de una opinión personal o colectiva sobre el desempeño del presidente, no asociada específicamente a un tema, sufragio o comicios, que como acertadamente resume Ulises Beltrán:

> ... aun cuando puede estar influido por la identidad de las personas con los distintos partidos políticos o contener juicios sobre la personalidad o carisma del gobernante, resume en un juicio sumario simple lo que la mayoría piensa del desempeño del gobierno y, de manera indirecta, sobre su percepción del estado general del país (Beltrán, 2015).

Una de las pautas del comportamiento electoral más añeja y que a su vez goza de mayor nivel de aceptación es que la elección presidencial versa sobre el desempeño del gobierno. "La decisión de votar se adopta según la política que el gobierno haya seguido durante el período electoral (mandato). Se trata de una reacción del votante a la actuación efectiva del gobierno" (Downs, 1973: 257).

La idea de la escuela racional de vincular la decisión electoral con la actuación efectiva del gobierno (desempeño) la distingue de interpretaciones alternativas que ponen énfasis en la identificación partidaria, los clivajes, las campañas, la fortaleza de la imagen de los candidatos, etc. Por otra parte, constituyendo el desempeño del partido en el gobierno la clave del desenlace electoral puede entenderse más cabalmente desde dónde proviene la capacidad anticipativa de la popularidad presidencial. Si la aprobación del mandatario en turno tiene la capacidad de anticipar el éxito o la derrota del partido o coalición de gobierno se debe, en gran medida, a que de un modo aproximado refleja la percepción que los ciudadanos tienen en general sobre el desempeño del gobierno. La pregunta de la encuesta va precisamente en esa dirección: ¿En general, usted aprueba o desaprueba el trabajo que está haciendo el presidente? (Díaz, 2019 y 2019a).

En síntesis, desde Downs (1973) se reconoce que la elección versa sobre el desempeño del gobierno. Teóricamente, gobiernos que mejoran el bienestar de los electores deben recibir como premio su respaldo, mientras gobiernos que no lo consiguen deben ser castigados en las urnas. Entonces, conviene esclarecer por qué razón, en la práctica, gobiernos mal evaluados resultan premiados y gobiernos bien evaluados, en cambio, son castigados por los votantes.

Existen teorías que tienden a poner el acento lejos del argumento de Downs, exactamente en factores de largo plazo como la identificación partidaria o la acción de ciertos clivajes. Sin embargo, en la actualidad resulta un hecho cada vez más aceptado por los estudiosos del comportamiento electoral, que las variables identificación partidaria y clivajes carecen de la consistencia que le atribuyeron sus precursores para explicar el desenlace electoral (Fiorina, 1981; Anduiza y Bosch, 2004; Tagina, 2008).

Otras teorías, como el modelo de Columbia y la escuela comunicacional, han tendido a ubicar la causa del resultado electoral en la propia dinámica de las campañas electorales. Mientras en el modelo de Columbia las campañas constituyen una coyuntura con protagonismo en la definición de las preferencias, la escuela comunicacional va a identificar en el seno de las mismas procesos con cierto poder de inclinar la dirección de las preferencias electorales, como la influencia de los medios, la estrategia de los candidatos, la estructura partidaria que respalda las aspiraciones, los recursos a su alcance, el manejo de los escándalos, los traspiés en los debates, así como las fortalezas y debilidades en la imagen de los contendientes. En esta investigación no se niega la influencia que, en determinadas circunstancias, ejercen los factores que son tenidos en cuenta por el modelo de Columbia y la teoría comunicacional.

Sin embargo, llamamos la atención sobre dos aspectos: Primero, el hecho de que la evidencia empírica corrobora que en América Latina -prácticamente en el 90% de los casos- los gobiernos que contaron con una alta aprobación retuvieron el poder y los gobiernos que contaron con una baja aprobación lo perdieron, dando así la razón a la explicación downsiana de que el desempeño del partido en el gobierno es la clave del desenlace electoral (Díaz, 2019 y 2019a). Segundo, en aquellos casos minoritarios donde se produjo la desconexión entre nivel de aprobación del mandatario de turno y el éxito o derrota del partido en el gobierno, hasta el momento el análisis de casos va arrojando como causas primarias de la falta de consistencia la acción de otros factores de un calado mayor a los manejados por las teorías señaladas, por el hecho fundamental de que esos factores consiguen situar al candidato presidencial del partido o coalición de gobierno en una situación de ventaja o desventaja crucial incluso desde antes de iniciarse la campaña.

En primer lugar, nos referimos específicamente a la participación del partido o coalición de gobierno en la contienda electoral afectada por un proceso de división interna manifiesto u oculto, que sitúa al oficialismo en una situación de inferioridad con respecto a su principal adversario opositor. La fractura tiene como principal efecto desconcentrar el voto progubernamental, con independencia de que el gobernante de turno se encuentre bien evaluado. La variable división interna del oficialismo re-

fleja la participación fracturada del partido o coalición gubernamental en el proceso electoral como consecuencia, generalmente, del rechazo de referentes o líderes oficialistas al proceso de selección del candidato presidencial o al programa de gobierno que éste enarbola o representa. Se trata de una expresión de la falta de solución de determinados conflictos internos de la organización que, además de haberse podido manifestar durante el mandato, aflora a su vez en la propia contienda electoral comprometiendo el propósito de conservar el poder. Este enfoque tiene su sustento en las teorías que enfatizan el carácter no unitario de los partidos como organizaciones (Sartori, 2005; Panebianco, 1986; Kazt y Mair, 2002) y especialmente, en la concepción de Panebianco (1986) referente a que mientras mayor es la unidad y la cohesión, mayores también serán las posibilidades de que el partido gane, porque las áreas de incertidumbre son menores; mientras en un partido dividido la debilidad y el fraccionamiento del poder constituyen un riesgo mayor.

En segundo lugar, nos referimos al hecho de que el principal partido de la oposición no constituya una opción de gobierno creíble como consecuencia de que el imaginario colectivo le atribuye responsabilidad con el pasado autoritario más reciente, percibiendo su eventual ascenso al poder como una amenaza para la continuidad del régimen democrático, o porque no ha tenido experiencia de gobierno a nivel nacional y procede de uno de los extremos del espectro ideológico desde donde defendió posturas antisistema. Ambos rasgos de la oposición terminan favoreciendo la retención del poder en manos del oficialismo, a pesar de que el mandatario de turno se encuentre mal evaluado. Si un partido de la oposición no es fiable es incapaz de ganarse la confianza y por tanto, los votos de los ciudadanos racionales (Downs, 1973: 115).

Por último, una breve precisión metodológica. Para considerar como alto o bajo el nivel de aprobación de un mandatario, en este trabajo nos guiamos por la clasificación aportada por Díaz (2019). Esa clasificación considera que un mandatario se encuentra mal evaluado cuando su aprobación previo al inicio de la campaña electoral es inferior al 40%, lo que indicaría que la diferencia entre los ciudadanos que lo desaprueban y los que aprueban su desempeño tiende a inclinarse significativamente en su contra. El impacto que tiene ese rango de aprobación en el éxito o

derrota del partido o coalición gubernamental tiende a ser consistente. En general, anticipa que el resultado electoral no favorecerá al partido o coalición de gobierno. En tanto, la misma clasificación mencionada considera que la aprobación del gobernante de turno es alta siempre que al inicio de la campaña electoral su popularidad sea superior al 45%, lo que tiende a reflejar que el número de personas que aprueban su desempeño es significativamente superior al número de personas que lo desaprueban. El impacto que tiene ese rango de aprobación en el éxito o derrota del partido o coalición gubernamental tiende a ser también consistente. En general, suele anticipar que el resultado electoral favorecerá al candidato presidencial del oficialismo.

La situación de los mandatarios de turno con una aprobación superior al 40 y menor al 45% es de naturaleza diferente. La característica distintiva del rango es la existencia de un estado de tensión o de igualación creciente entre los ciudadanos que aprueban y los que desaprueban a los mandatarios, lo cual conduce a clasificarlo como de desempeño intermedio o regular. El impacto que tiene ese rango de popularidad en el eventual éxito o derrota del partido o coalición de gobierno tiende a ser laxo. Cuando la popularidad del mandatario se ubica en esa franja (mayor a 40 y menor al 45% de aprobación), no existe garantía de que el partido o coalición de gobierno pueda retener el poder, pero tampoco de que pueda perderlo. El intervalo es enfocado como un interregno donde la popularidad del presidente no anticipa, al menos de manera contundente, el éxito o la derrota del candidato del partido o coalición gubernamental. Aunque a primera vista la franja parece relativamente amplia, la evidencia empírica corrobora que la regla es que los mandatarios latinoamericanos lleguen mal o bien evaluados al momento en que se disputa en las urnas la continuidad del partido o coalición de gobierno[9].

9 Una muestra de 43 comicios presidenciales celebrados en siete países de América Latina (Chile, Uruguay, Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica y México) desde el retorno de la democracia hasta la actualidad (1983-2018) arrojó que, de un total de 38 elecciones, los presidentes de turno arribaron a la etapa previa al inicio de las campañas con una aprobación alta o baja (Díaz, 2019).

El caso de los comicios presidenciales en Chile 1999-2000. Contexto de la elección presidencial

En Chile, la introducción del sistema electoral binominal en 1989 estimuló fuertemente la formación y conservación de coaliciones (Carey, 2002; Siavelis, 1997). En ese sentido, las coaliciones de derecha y de centroizquierda constituyen las más largas y perdurables de la historia contemporánea de Chile (Siavelis, 2004). En la nueva etapa democrática iniciada en 1990, el principal partido del centro, la Democracia Cristiana (DC) y el principal partido de izquierda, el Partido Socialista (PS), formaron una coalición electoral y de gobierno, la Concertación para la Democracia que gobernaría Chile desde la restauración democrática en 1990[10]. Además del Partido Socialista y la Democracia Cristiana, la coalición de gobierno estuvo integrada por el Partido Por la Democracia (PPD) y otros dos partidos menores como el Partido Radical y el Partido Social Demócrata, que posteriormente se unieron en un solo lema partidario.

Por su parte, la derecha chilena, representada por los partidos Renovación Nacional (RN) de tendencia más moderada y Unión Democrática Independiente (UDI) de inclinación pinochetista, se coaligó primero en Unión por Chile y después en Alianza por Chile (Moreira, 2006). De esta forma, aunque el sistema de partidos posterior a la dictadura pinochetista se integra por cinco partidos importantes, la competencia política y electoral en Chile desde el retorno a la democracia adquirió una dinámica bipolar reflejada en conformación de dos bloques (centroizquierda y derecha) que se reparten el grueso de los votos y de los escaños legislativos (Moreira, 2006).

10 La alianza nació como estrategia política para derrotar la continuidad del gobierno de Pinochet en el plebiscito del año 1988 y significó a su vez una división de la izquierda, al no integrarse a la misma el Partido Comunista, el otro gran partido de la izquierda chilena (Moreira, 2006).

En 1999, tras dos períodos consecutivos de mandatos, 1990-1993 y 1994-2000[11], la coalición gubernamental, Concertación de Partidos por la Democracia, se disponía a intentar ganar su tercera elección consecutiva[12]. El primer presidente proveniente de la Concertación, Patricio Aylwin, había concluido su mandato con una aprobación superior al 50%, tasas elevadas de crecimiento económico y una disminución de los índices de pobreza, frente a una oposición carente de proyecto político y liderazgo (Joignant, 2003: 85). Sin embargo, en 1999, cuando estaba por concluir el segundo mandato de la Concertación la situación era diferente. En efecto, la aprobación de la gestión del mandatario Frei fue descendiendo gradualmente, hasta que finalmente se vio arrastrada por la crisis financiera asiática que golpeó la economía chilena generando un decrecimiento del PIB[13]. Como consecuencia, el desempleo había alcanzado niveles históricos, mientras se disparaba a su vez la percepción de inseguridad por parte la ciudadanía. Navia (2000:2), tomando como referencia primordialmente las tasas de crecimiento del país entre 1994 y 1997, consideró que el gobierno de Eduardo Frei será recordado por los exitosos primeros cuatro años, pero también por el desencanto y por la crisis económica de los últimos dos. En efecto, hasta 1998 el consenso sobre el funcionamiento del modelo económico consolidado a fines del régimen militar se sostenía en tres pilares: altas tasas de crecimiento, inserción internacional y reducción de la pobreza. Pero, el panorama era diferente hacia el final del mandato de Frei Ruiz-Tagle. De acuerdo con

11 El ordenamiento constitucional chileno ha consagrado períodos de cinco, seis, ocho y cuatro años. En 1989, en virtud de una disposición transitoria se estableció como excepción que el primer período presidencial sólo fuera de cuatro años, contrario a lo estipulado en la Constitución de 1980, que preveía un mandato de 8 años de duración. En diciembre de 1993, el gobierno y los partidos aprobaron el acuerdo de seis años de duración del mandato, que en 2005 volvió a ser objeto de reforma constitucional, para dejar la duración del mandato en cuatro años sin posibilidad de reelección para el período inmediato (García, 2002; Beca, 2008).

12 La historia de la Concertación de Partidos por la Democracia hasta ese momento se puede resumir del siguiente modo: en 1988 se constituyó en bloque electoral que derrotó al gobierno militar de Augusto Pinochet en el plebiscito sobre el respaldo a la continuidad o no del régimen dictatorial, en 1989 pasó a ser una alianza electoral con vistas a enfrentar las primeras elecciones presidenciales que marcarían la transición a la democracia en Chile y a partir de 1990 se convirtió en coalición gubernamental bajo el mandato del presidente Patricio Aylwin, proveniente del Partido Demócrata Cristiano, condición que retuvo en 1994 a través del también democristiano Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

13 Mientras en los primeros cuatro años del sexenio el crecimiento del PIB había promediado 7,75%, en el importante año electoral de 1999 alcanzó a contraerse hasta el 1%.

Avendaño (2009), el desempleo alcanzaba el 11%, el crecimiento registraba cifras cercanas a cero, se producía un aumento de la conflictividad social, existía una fuerte sensación de inseguridad y aumentaba la evaluación negativa sobre la gestión del gobierno.

A partir de 1988, el comportamiento electoral del votante chileno lo había condicionado el eje dictadura-democracia, reflejado en la contraposición Concertación-Pinochet. Dentro de ese marco se habían producido las contundentes victorias electorales de los mandatarios concertacionistas, Patricio Aylwin y Eduardo Frei Ruiz-Tagle. El primero se impuso en los comicios de 1989 por una diferencia mayor a los 25 puntos porcentuales, mientras Frei Ruiz-Tagle emergió vencedor en las elecciones de 1993 con una diferencia aún mayor: 33.56 puntos porcentuales. Por tanto, lo específico de la convocatoria electoral de 1999 consistió en si en un contexto general por primera vez desventajoso, signado por la contracción sustancial de las tasas de crecimiento económico y el fuerte rechazo a la gestión del mandatario de turno Frei Ruiz-Tagle (28% de aprobación y 45% de rechazo), y si la Concertación de Partidos por la Democracia podría ser también capaz de obtener nuevamente el respaldo mayoritario de los votantes chilenos.

En ese escenario, los partidos de la coalición gubernamental efectuaron un proceso abierto de primarias en el que emergió como candidato presidencial de la Concertación el socialista Ricardo Lagos. Fue la primera vez desde la transición a la democracia que un miembro del Partido Socialista era a su vez el candidato presidencial del oficialismo. El reto adicional que planteaba para la Concertación la elección de un militante de izquierda, Ricardo Lagos, como su candidato presidencial, es que abrió la posibilidad de que la coalición de derecha se volcara con mucho mayor vigor en la campaña electoral hacia la conquista del votante de centro. Este último podría llegar a sentirse temeroso de que la moderación que había caracterizado la gestión de la Concertación de Partidos por la Democracia fuera desplazada por una eventual izquierdización o radicalización de la coalición gubernamental.

Adicionalmente, en 1998, un año antes de las elecciones presidenciales, el general Augusto Pinochet había sido detenido en Londres. La detención del dictador contribuyó a que el candidato de la coalición de dere-

cha, formada por los partidos Unión Democrática Independiente (UDI) y Renovación Nacional (RN), el ex alcalde Joaquín Lavín, tomara distancia con respecto al régimen militar y "despinochetara" su campaña electoral (Huneeus, 2007).

En efecto, Joaquín Lavín se desmarcó de la condición de que el candidato de la derecha era un representante más o menos directo del régimen militar, con una campaña signada por el reconocimiento de que Pinochet era algo del pasado. Lavín proclamó que lo decisivo era elegir un agente eficiente como gestor, capaz de solucionar los graves problemas acumulados durante los diez años de administración concertacionista. En resumen, la campaña de Lavín tomó distancia del eje dictadura-democracia para intentar centrar la definición electoral en la calidad y solvencia de la gestión presidencial, así como en la solución de los crecientes problemas que aquejaban al ciudadano chileno. Lavín aprovechó la procedencia socialista del candidato de la Concertación, así como la propia detención de Pinochet en Londres, para dirigir su campaña hacia el votante de centro propenso a identificar, no sin sobresalto, una línea de continuidad entre el gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende y la candidatura presidencial socialista de Ricardo Lagos.

Aprobación presidencial de Eduardo Frei Ruiz-Tagle

Eduardo Frei Ruiz-Tagle inició su mandato con un amplio respaldo popular, pero su aprobación fue cayendo en la misma medida que corría el sexenio, a pesar de que durante los primeros cuatro años del mandato las tasas de crecimiento del PIB alcanzaron un promedio cercano al 8%. En noviembre de 1995, un año después de iniciado su mandato, la aprobación del presidente Frei era relativamente favorable: 47%; pero en noviembre de 1996 había caído al 40% y para enero de 1998 al 37%. En septiembre-octubre de 1999, meses antes del desenlace electoral, registraba un 28% de aprobación contra un 45% de rechazo, siendo esta última hasta ese momento la mayor tasa de desaprobación registrada en democracia por un mandatario chileno.

Cuadro 2. Dinámica de la aprobación del presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000).

Fecha y Año	Popularidad
Julio 1994	50%
Septiembre 1995	47%
Noviembre 1996	40%
Enero 1998	37%
Marzo 1999	32%
Octubre 1999	28%

Fuente: Elaboración propia con información de Encuestas CEP (1999).

En condiciones normales de competencia electoral es de esperar que semejante desempeño del mandatario de turno se vea reflejado en una reducción del volumen de votos que alcanza la candidatura presidencial del partido o coalición de gobierno, induciendo entonces una derrota gubernamental en las urnas. La evaluación retrospectiva conduce a que segmentos crecientes y decisivos de votantes tiendan a concluir que respaldando a un candidato de continuidad, la situación general del país como la personal difícilmente tenderá a mejorar durante un nuevo gobierno oficialista.

Buena parte de la dinámica de descenso de la aprobación presidencial de Frei se produjo a la par de una fuerte expansión económica. Mientras económicamente le fue mejor al país, simultáneamente también caía el nivel de aprobación de Frei Ruiz-Tagle. La irrupción de la crisis financiera de 1998 tuvo el efecto de acentuar la caída de su evaluación. El peor momento del mandatario con respecto a su aprobación se produjo en los meses previos a la definición de los comicios presidenciales (Navia, 2009)[14].

14 Sergio España (2002: 40), indagó en las razones de la declinante popularidad del presidente Eduardo Frei Ruiz - Tagle a lo largo de su mandato, señalando tres posibles causas de esa dinámica. España considera que la administración de Frei Ruiz -Tagle ostentó importantes logros que no son reconocidos en la evaluación de algunos sectores, tendiendo a prevalecer sobre la gestión del mandatario una mirada excesivamente crítica. Sin embargo, encuentra en tres dimensiones las claves que incidieron en la forma en que fue estructurada la evaluación del gobierno de Frei Ruiz-Tagle: 1) la personalidad del propio Frei y la forma en que ésta se proyecta públicamente; 2) las tensiones internas de la Concertación carente de un proyecto que reemplazara al de carácter fundacional que le diera origen durante los años ochenta; 3) y la reticencia de Frei a asumir un proyecto modernizador que le aportara un signo diferenciador y sentido global a su administración.

Un breve balance del comportamiento de la popularidad del presidente Frei Ruiz-Tagle evidencia, en primer lugar, que la situación económica favorable en los años iniciales de su sexenio (1994-2000) no resultó suficiente para que la relativamente alta popularidad que exhibió a inicios del mandato constitucional se incrementara o cuando menos se conservara. Al contrario, la dinámica de su aprobación se vio afectada por un proceso gradual de decrecimiento. Entre marzo de 1994 y enero de 1998, un período de prácticamente cuatro años, su popularidad descendió trece puntos. Factores ajenos a la economía, relacionados tanto con la proyección de su personalidad (falta de carisma) como directamente políticos[15], al parecer tuvieron un mayor peso en la evaluación del desempeño presidencial. Cuando a partir de 1998 las tasas favorables de crecimiento cedieron lugar a la contracción, el alineamiento que se produjo entre los factores económicos y políticos adversos tuvo el efecto de acelerar el ritmo de descenso de los niveles de aprobación de Frei Ruiz-Tagle[16]. Una especie de tormenta perfecta caracterizó entonces el contexto electoral en el cual la coalición gubernamental buscó ganar su tercera elección presidencial consecutiva.

La elección presidencial de 1999-2000

En la primera vuelta de la elección presidencial contendieron seis candidatos presidenciales: 1) el socialista Ricardo Lagos, representando a la coalición gubernamental. 2) Joaquín Lavín, en representación de la Alianza integrada por UDI y RN. 3) Arturo Frei Bolívar, en representación de los independientes con apoyo en Alianza Popular. 4) Sara María Larraín Ruiz-Tagle, independiente con apoyo de los ecologistas. 5) Gladys Marín, Partido Comunista. 6) Tomás Hirsch, Partido Humanista.

15 De acuerdo con España (2002) esos factores fueron la incapacidad de promover una agenda de cambios acorde con la situación de constituir el segundo gobierno de la Concertación y de impedir que emergieran las diferencias de visiones entre los partidos miembros de la coalición gubernamental.

16 Así sólo en el período comprendido entre enero de 1998 y octubre de 1999 (18 meses), su aprobación se redujo en otros nueve puntos.

El candidato presidencial de la Concertación de Partidos por la Democracia, Ricardo Lagos, había sido electo en primarias abiertas, trasparentes y limpias, lo que le daba una indiscutible legitimidad democrática a su candidatura y garantizaba la unidad del conglomerado. Sin embargo, en su contra jugaban también no pocos factores de enorme importancia. Primero, era el representante de la coalición gubernamental cuyo gobernante de turno registraba una aprobación del 28% y un rechazo del 45% (Encuestas CEP: 1999). Segundo, el crecimiento económico se había contraído hasta alcanzar niveles de recesión durante el mandato oficialista cuya candidatura presidencial él representaba. Tercero, habían transcurrido 10 años de gobiernos ininterrumpidos de la Concertación de Partidos por la Democracia, por lo que la coalición gubernamental estaba afectada por el desgaste propio de quienes conducen las riendas del poder por varios mandatos. Cuarto, dada su militancia de izquierda, Lagos fue visto como una amenaza por el empresariado por el ideario progresista que encarnaba[17]. Quinto, luego de su holgado triunfo en primarias[18], la campaña de Lagos se vio afectada por un exceso de confianza y comenzó tarde, cediendo la iniciativa a su principal adversario, que enmarcó al socialista como el candidato de la continuidad del estado de cosas que la mayoría de la sociedad desaprobaba. Sexto, el arresto del general Pinochet en Londres facilitó que el discurso del candidato presidencial de la derecha tomara distancia del régimen dictatorial que padeció el país entre 1973 y 1990.

A pesar de esos importantes inconvenientes, el candidato de la coalición gubernamental Ricardo Lagos se impuso en la primera vuelta electoral sumando el respaldo del 47.96 por ciento de los votos válidos (Servicio Electoral de la República de Chile, Servel). Sin embargo, la noticia que acaparó la atención mediática fue que el candidato de la derecha, Joaquín Lavín, obtuviera una votación de 47.51 por ciento de los votos válidos (Servel), a sólo 0.45 por ciento del candidato de la coalición de gobierno, siendo la mayor votación alcanzada por la derecha en su his-

17 Según Zúñiga y Gutiérrez (2000) aparecía como una remembranza de la traumática experiencia de la Unidad Popular de Salvador Allende cuando llegó al poder a fines de 1970 (Zúñiga y Gutiérrez ,2000: 294).

18 En las primarias, Ricardo Lagos fue respaldado por el 71% de los votos de casi un millón y medio de votantes.

toria. Por primera vez, ninguno de los candidatos alcanzó la mayoría absoluta de los votos y por tanto debió acudirse a la segunda vuelta para dirimir al vencedor.

Indudablemente, los resultados de Joaquín Lavín y la necesidad de convocar una segunda vuelta electoral -por primera vez en la historia de Chile- constituyeron hitos de esa elección. Pero en nuestra visión, dados los negativos que impactaban la campaña del candidato de la coalición oficialista, debió sorprender del mismo modo que el candidato oficialista Ricardo Lagos lograra imponerse en la primera vuelta[19].

La segunda vuelta electoral se efectuó un mes después que tuvo lugar la primera. En esa etapa son importantes los endosos y llamados que realizan los candidatos perdedores de la primera etapa. Los candidatos Larraín e Hirsh llamaron a sus votantes a respaldar al candidato de la coalición de gobierno, Ricardo Lagos. Mientras que Arturo Frei Bolívar pidió a sus votantes apoyar a Lavín. Por su parte, la comunista Gladys Marín solicitó a sus votantes anular el voto[20]. El resultado de la segunda vuelta, aunque nuevamente reñido, favoreció igualmente al candidato de la coalición de gobierno, Ricardo Lagos, que sumó el 51 por ciento de los votos, contra el 48 por ciento de su rival, Joaquín Lavín.

Con base en la evidencia analizada, lo que determinó en última instancia la victoria oficialista es que estaba en juego la posibilidad de retorno al poder de los representantes directos o indirectos del régimen autoritario. Ello implicaba, cuando menos, un eventual retroceso en el camino de la democratización que el país había seguido en los últimos diez años. El arresto del general Pinochet y la toma de distancia con respecto al régimen militar que encabezó, realizada por Joaquín Lavín y otros líderes de la derecha durante la campaña, no obstante, debieron contribuir a que fuera más complicado percibir que el eje surgido en 1988 continuaba activo.

19 A propósito, Lagos y Lavín de conjunto sumaron el respaldo del 95.47% de los votos válidos emitidos en la primera vuelta, mientras que los cuatro restantes contendientes se repartieron el resto del siguiente modo: los independientes Arturo Frei y Sara Larraín, 0.38% y 0.44%, respectivamente, la comunista Gladys Marín, 3.19% y el humanista Tomás Hirsh, 0.51% (Servicio Electoral República de Chile).

20 La exhortación de Gladys Marín, a juzgar por los análisis post electorales, fue desatendido. Las bases comunistas no respaldaron la orientación dada por la cúpula partidista.

El eje democracia-dictadura, Concertación-Pinochet, que explica el comportamiento del votante chileno tanto en el plebiscito de 1988, como en las presidenciales de 1989 y 1993 conservó aún su vitalidad, aunque ciertamente erosionado, como evidencia lo reñido de la votación. El significado de ese eje es que sólo uno de los dos contendientes principales en disputa no ofrecía dudas sobre su compromiso con la continuidad de la consolidación democrática. La coalición de derecha, al generar dudas sobre su compromiso con la democracia, no constituía una opción de gobierno creíble para la mayoría de los votantes, pese a los indudables problemas de desempeño que lastraron a la administración de Frei Ruiz- Tagle. A nuestro modo de ver, ese fue el hecho decisivo y determinante que hizo posible la victoria de la candidatura presidencial de Ricardo Lagos en un contexto tan adverso.

En efecto, aunque Joaquín Lavín, miembro destacado de Unión Democrática Independiente (UDI) y ex secretario general del partido (Huneeaus, 2001), hiciera ver durante su campaña por primera vez que un eventual gobierno de derecha tomaría distancia con respecto a los personeros del régimen pinochetista, varios datos duros continuaban condicionando que el imaginario colectivo tendiera a viajar en una dirección diferente a la imagen que promocionaron el aspirante presidencial y otros líderes de la coalición de derecha. Esos datos son los siguientes:

Joaquín Lavín fue el candidato presidencial de UDI, un partido de derecha creado durante la etapa dictatorial con financiamiento del régimen, debido a que su fundador, Jorge Guzmán, apoyó a la dictadura, justificó la "mano dura" y las violaciones de los derechos humanos. La UDI "surgió durante el régimen autoritario del general Augusto Pinochet y cuyos dirigentes constituyeron la principal élite civil de apoyo a éste y su fundador, Jaime Guzmán, fue el actor civil más influyente en ese régimen político" (Huneeus, 2001). Desde su surgimiento, la UDI desplegó una estrategia de construcción de un movimiento político beneficiándose con los recursos proporcionados por el liderazgo autoritario.

Ello les permitió establecer una organización a lo largo del país con adherentes y simpatizantes y una considerable presencia de los sectores populares. Fue posible que desarrollaran esta labor porque respaldaron sin vacilaciones al régimen autoritario y en especial al general Pinochet, y porque

contaron con la simpatía de los militares y el empresariado. El "gremialismo" (UDI) constituyó, junto al equipo económico conocido como "los Chicago Boys", el principal grupo de poder, teniendo una importante presencia en los numerosos gabinetes del régimen (Huneuus, 2001: 8 y 9).

Llegado el momento en que el régimen militar debió convocar elecciones presidenciales que devendrían en una eventual transición democrática, el líder y fundador de UDI, Jaime Guzmán, fue coautor intelectual de la tesis de la democracia protegida por la primacía de los militares y los enclaves autoritarios sembrados en la Constitución del país.

> ...como miembro de la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución, (Jaime Guzmán) tuvo una enorme influencia en la definición de la arquitectura institucional de la democracia protegida y autoritaria establecida en la Carta Fundamental de 1980. Sus argumentos ayudaron a persuadir a los demás miembros de la Comisión para incorporar en el Anteproyecto sus principales recursos institucionales, como la tutela militar, el pluralismo limitado, las restricciones al rol de los partidos y el presidencialismo sobredimensionado (Huneeus, 2001: 20).

La imbricación entre UDI y el régimen militar fue de tal magnitud que ninguna otra organización civil tuvo el número de representantes que tuvo UDI al frente de ministerios durante la Junta Militar. Un total de veintiséis miembros del UDI ocuparon altos cargos en los diferentes gabinetes de la Junta Militar que gobernó al país entre 1973 y 1989.

> La influencia del autoritarismo en el surgimiento y desarrollo de la UDI fue considerable. Sus principales dirigentes fueron altos funcionarios del régimen. Todos sus senadores elegidos en cada una de las tres elecciones parlamentarias-1989, 1993 y 1997- ocuparon cargos en él, la mayoría de sus diputados elegidos en esas tres elecciones habían sido alcaldes designados por el régimen anterior y la casi totalidad de sus dirigentes superiores tuvieron cargos en el gobierno militar. Importantes ministros de Pinochet, como el del Interior, Sergio Fernández, el de Hacienda, Hernán Buchi, y el de Vivienda y Urbanismo, Miguel Ángel Produje, están integrados a la UDI. En la experiencia comparada de las nuevas democracias no encontramos otro partido que tenga tan alto grado de continuidad con la elite autoritaria como la UDI (Huneeus, 2001: 9).

Asimismo, una vez que la transición democrática dio inicio con los primeros dos gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia liderados por Patricio Aylwin y Eduardo Frei Ruiz-Tagle, las tensiones generadas por el eje dictadura-democracia no desaparecieron, sino que se manifestaron de otras formas. Especialmente, se experimentaron a través de provocaciones de los militares como los movimientos inusitados de tropas, el freno a las iniciativas de investigación de las violaciones de los derechos humanos y la disposición a no entregar a los máximos responsables probados de las mismas. Pero, sobre todo, su presencia era muy fuerte en el terreno institucional, donde fue evidente la necesidad de que mediante reformas constitucionales se eliminaran enclaves autoritarios como los senadores designados y vitalicios, así como el Consejo de Seguridad Nacional, donde las decisiones estratégicas del país eran tuteladas por las Fuerzas Armadas y, además se avanzara en el reclamo de exigir responsabilidades judiciales a los violadores de los derechos humanos durante la etapa dictatorial.

El progreso legislativo de esos temas tropezó siempre con el bloqueo férreo por los congresistas de UDI, que gracias al sistema electoral binominal heredado de la dictadura, disfrutaban de una sobrerrepresentación en el Congreso.

> Durante los 90, la UDI logró bloquear los diversos proyectos de reforma constitucional que fueron presentados desde el gobierno, amparándose en la capacidad de veto que este partido adquiría como consecuencia del sistema binominal y de la presencia de senadores designados (Garretón, 2003: 192 y ss.). La defensa de la institucionalidad autoritaria por parte de la UDI, radicaba en su sólida coherencia doctrinaria sustentada bajo el principio de la "democracia protegida". Pero también influían otros hechos relacionados con la organización y composición del partido, como el carácter cohesionado y centralizado de la organización (Berrios, 2007: 30) y la alta presencia entre sus parlamentarios de personas que desempeñaron cargos en el gobierno militar (Huneeuss, 2000: 616-617; Avendaño, 2009: 7).

Que centráramos nuestra atención en la implicación de UDI con el régimen militar, para nada significa que el otro partido integrante de la alianza de derecha, Restauración Nacional (RN), estuviera excluido de colaborar con el régimen autoritario.

> Hemos argumentado que la UDI estuvo estrechamente vinculada con el régimen autoritario, lo cual no quiere decir que RN no tuviera relación con éste. En efecto, los candidatos de los dos partidos en las elecciones parlamentarias de 1989 fueron seleccionados mayoritariamente entre personas que había colaborado con el régimen de Pinochet. De los 120 candidatos a diputados, 51 habían sido alcaldes (42,5%) 18 ocuparon algún puesto de Gobierno (15%) y 51 no ocuparon posición alguna en la estructura de poder del régimen militar (Huneuus, 2001: 37).

Por consiguiente, si bien después de la detención del general Augusto Pinochet en Londres, podría concederse que perdió relativamente fuerza la amenaza de un posible retorno al régimen dictatorial con un eventual triunfo de la derecha, en cambio, continuaba plenamente vigente la amenaza del congelamiento del avance del proceso de democratización mediante el enquistamiento de los enclaves autoritarios y la protección a los responsables directos de la violación de los derechos humanos. La cancelación de esos avances, a la postre significaban la continuidad del modelo de democracia protegida y el sabotaje, a mediano plazo, de la consolidación democrática. Lo que estaba en juego con la elección era, por tanto, la continuidad de la construcción democrática o la amenaza de estancamiento en una forma diferente de régimen con respecto al que caracterizó a la Junta Militar, pero con fuertes componentes autoritarios.

Los representantes principales de la derecha negaron esa visión durante la campaña. En primer lugar, Andrés Allamand (Zúñiga y Gutiérrez, 2000), uno de los fundadores del partido RN, socio de UDI en la alianza electoral de derecha. Pero, el hecho de que la mayoría de los votantes decidió pasar por alto factores de mediano y corto plazo de indiscutida relevancia (pobre desempeño presidencial y situación económica crítica), y siguiendo un comportamiento que desafía la lógica de la decisión electoral, respaldaron la continuidad del oficialismo, apuntando a que la razón potencial tras esa conducta es que la oposición, dicho en lenguaje downsiano, no constituía una fuerza política fiable dada la indudable fortaleza de sus lazos con el régimen militar pinochetista.

Navia y Joignant (2000) reportaron que lo inédito del carácter reñido de la competencia fue asociado por algunos autores a la supeditación del comportamiento del votante chileno a un nuevo y emergente eje (desempeño vs. incompetencia) que supuestamente sustituyó al transicional (democracia vs dictadura).

> Una vez decidida la victoria de Lagos, los analistas comenzaron a sugerir que el mapa político chileno había cambiado y que la división "Si-No" que caracterizó todas las elecciones desde 1988, donde era mayoría el "No" (Concertación), ya no existía. Varios modelos diferentes fueron ampliamente discutidos en la prensa. Todos sugerían alguna nueva forma de alineación política (...) la evidencia utilizada para anunciar el fin de dicho cleavage no es tan concluyente como muchos han planteado (Navia y Joignant, 2000: 121).

Navia y Joignant (2000) concluyen con que no se sostenía la tesis de un nuevo votante chileno a partir de los resultados electorales de diciembre de 1999 y enero de 2000, debido a que a fin de cuentas, la concertación de partidos había emergido victoriosa en la contienda como en todas las contiendas electorales anteriores. Así, el eje que condicionaba el comportamiento electoral en Chile desde el plebiscito de 1988 no estaba obsoleto, sino que conservaba su vigor. Justamente, lo que en definitiva expresa la presencia de ese eje es que sólo uno de los dos polos de la relación constituía para la mayoría de los votantes en los comicios presidenciales de 1999 y 2000 una opción de gobierno creíble. La conclusión de esos autores nos parece acertada. Aunque la detención del general Augusto Pinochet en Londres, en el mes de octubre de 1998, significó que perdiera fuerza la amenaza de un posible retorno al régimen dictatorial con un eventual triunfo de la derecha. Sin embargo, el involucramiento de UDI y RN con el régimen militar y sus permanentes bloqueos en el Congreso a las reformas constitucionales destinadas a eliminar los enclaves autoritarios, representaban así un riesgo de congelamiento para el avance del proceso de democratización en caso de una victoria electoral de la oposición. Sólo puede explicarse el triunfo oficialista a partir de lo que estaba verdaderamente en juego con la decisión electoral: la continuidad de la construcción democrática o el desvío hacia una forma diferente de régimen con respecto al que caracterizó a la Junta Militar, pero también básicamente autoritario.

Resumiendo, cuando se reconoce que el eje dictadura-democracia continuaba vigente (Navia y Joignant, 2000), lo que subyace es que los ganadores de la elección presidencial de 1999 y 2000, la Concertación, lo fue fundamentalmente debido a que un eventual triunfo de sus adversarios de UDI y RN continuaba constituyendo para sectores decisivos

de votantes una amenaza para la permanencia del régimen democrático apenas en construcción. Dicho con otras palabras, la oposición de derecha no constituía entonces una alternativa de gobierno creíble para la mayoría de los votantes.

El caso de los comicios presidenciales en Chile 2009-2010. Contexto de la elección presidencial

Por su parte, la elección presidencial de diciembre de 2009 y enero de 2010 en Chile constituye, probablemente, un ejemplo fehaciente de cómo la división interna del partido o coalición oficialista es capaz de anular la asociación que debe producirse entre una alta popularidad presidencial y el triunfo del partido o coalición en el poder.

Cuadro 3. Fecha de los comicios presidenciales, mandatario de turno y candidato presidencial del oficialismo

Año de los comicios presidenciales	Mandatario de turno	Candidato presidencial del oficialismo
2009 y 2010	Michelle Bachelet	Eduardo Frei Ruiz-Tagle

Fuente: Elaboración propia

Posiblemente, la mayor ironía asociada con el resultado del oficialismo en esos comicios resida en que el comando del candidato presidencial de la coalición oficialista, Eduardo Frei Ruiz –Tagle[21], trabajó especialmente en ligar al aspirante con la imagen de la mandataria, bajo el supuesto de que el alto nivel de aprobación de Bachelet terminaría por traducirse

21 Curiosamente, el exmandatario Eduardo Frei Ruiz-Tagle jugó un papel protagónico en los dos casos de elecciones presidenciales chilenas en las que no se produjo la asociación entre popularidad presidencial y éxito o derrota del partido en el gobierno. En el primer caso (1999-2000) Frei Ruiz-Tagle era el mandatario de turno con un bajo nivel de aprobación, mientras en el segundo (2009-2010), el expresidente fue por segunda ocasión el candidato presidencial de la coalición de gobierno centroizquierdista y la forma en que su candidatura fue decidida por las cúpulas partidistas catalizó la división interna del bloque gubernamental impidiendo capitalizar la alta aprobación de la entonces mandataria Michelle Bachelet y conduciendo al bloque gubernamental a la pérdida del poder.

en intención de voto hacia su candidatura, siguiendo las líneas teóricas asociadas a la función voto-popularidad (Espinoza, Morales y Perelló, 2009). Pero la estrategia terminó por resultar fallida. El presupuesto teórico de partida, en principio correcto, esa vez no les funcionó.

Para diciembre de 2009, la centroizquierdista "Coalición de Partidos por la Democracia" se propuso ganar su cuarta elección consecutiva desde el retorno de Chile a la democracia (1989). Aspiraba con ello a convertirse en la coalición que más tiempo había permanecido democráticamente en el poder en América Latina. Para alcanzar ese fin basaba sus aspiraciones en que desde que asumió el poder en 1990, la Concertación había guiado al país por un sendero de desarrollo y progreso. Los gobiernos de Patricio Aylwin (1990-1994), Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000), así como los de Ricardo Lagos (2000-2006) y Michelle Bachelet (2006-2010) transformaron radicalmente el país. La reducción de los niveles de pobreza, la ampliación de la cobertura de educación, salud y vivienda y el crecimiento económico fue notable abriendo las puertas del desarrollo a más personas. En ninguna época anterior Chile estuvo mejor que bajo las riendas de la Concertación. El país jamás progresó tanto y la consolidación de la democracia fue un hecho innegable. Ningún observador objetivo pasaba por alto que la Concertación transformó a Chile en la dirección correcta (Morales y Navia, 2010: 21-22).

Al mismo tiempo, la enorme popularidad de la presidenta saliente, Michelle Bachelet, que exhibía niveles de aprobación que no había recibido ningún mandatario en el país, parecía augurar que una vez más el traspaso de poder dentro de la propia coalición gobernante tenía enormes probabilidades de resultar exitoso, del mismo modo que lo había sido en los comicios de 1994, 2000 y 2006, respectivamente. En esas condiciones favorables para que el partido o coalición gobernante alcance a retener el poder, el factor que puede detonar la división interna y con ello debilitar el traspaso de la popularidad del mandatario de turno en votos para el oficialismo es el proceso de selección del candidato a suceder al presidente, especialmente cuando no se desarrolla cumpliendo requisitos de equidad, participación y trasparencia.

Precisamente, desde su formación como coalición multipartidista en 1988, la Concertación tuvo altibajos con el proceso de selección del can-

didato presidencial. En las elecciones de 1990, aunque los partidos de izquierda miembros de la coalición consideraron apropiado que la Democracia Cristiana tenía el mejor derecho a escoger el candidato y declinaron sus aspiraciones presidenciales para favorecer una transición ordenada y no traumática hacia la democracia, al interior de la Democracia Cristiana no existió un mecanismo claro, transparente y legitimado para seleccionar al candidato[22].

En las elecciones de 1993 la situación mejoró, los partidos de izquierda integrantes de la coalición lograron imponer un proceso de primarias que permitió a militantes y simpatizantes previamente inscritos definir el nombre del candidato. Fue la voluntad popular y no las estructuras de liderazgo partidistas las que definieron el nombre del candidato presidencial oficialista. Incluso, el entonces aspirante por el partido socialista, Ricardo Lagos, quién fue derrotado por Frei Ruiz-Tagle en las primarias de 1993, reconoció públicamente que la coalición oficialista había sentado el precedente de un mecanismo de legitimidad democrática para la selección del abanderado concertacionista (Navia y Rojas, 2008).

Seis años después, en 1999, la Concertación dio otro paso en favor de profundizar el proceso democrático interno de selección del candidato presidencial implementando elecciones primarias abiertas y vinculantes. Contrario a su resultado de 1993, en esa oportunidad Ricardo Lagos logró emerger vencedor revistiéndose de una sólida legitimidad democrática. Pero hacia 2005 el avance se frenó. La Concertación demoró en establecer un mecanismo de selección de su candidato y finalmente quedó como única candidata la aspirante mejor situada en las encuestas, Michelle Bachelet. A diferencia de 1999, la Concertación no estableció desde temprano las reglas y un calendario para la selección de su candidato, lo que facilitó que la nominación finalmente recayera en la persona que estaba mejor posicionada en las encuestas. Fue la popularidad anterior de Bachelet y no su desempeño en una campaña de primarias lo que la terminó convirtiendo en candidata presidencial de la Concertación, lo que evidenció una clara falencia en el proceso utilizado para seleccio-

22 De hecho, el proceso de nominación interna que ungió a Patricio Aylwin como candidato presidencial estuvo marcado por acusaciones de irregularidades y negociaciones que hasta el día de hoy parcialmente tiñen la forma en que Aylwin logró la nominación de su partido (Morales y Navia, 2010,29).

nar al candidato presidencial. La ausencia de un procedimiento claro y establecido desde temprano condujo a que la Concertación terminara diseñando un proceso *ad hoc* que le permitiera nominar al candidato que estaba mejor posicionado en las encuestas (Morales y Navia, 2010).

En 2009, al cabo de veinte años en el poder, los partidos de la Concertación seguían sin tener un mecanismo consensuado y establecido para escoger al candidato presidencial del conglomerado. Sin embargo, el número de potenciales aspirantes era significativo. Figuraban entre ellos, los ex presidentes Ricardo Lagos y Eduardo Frei Ruiz-Tagle y también, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza. Tanto Lagos como Insulza renunciaron, mientras ex mandatario Frei Ruiz-Tagle mantuvo sus aspiraciones. En esas circunstancias, la Concertación anunció nuevas reglas para desarrollar el proceso de primarias. Se optó por un mecanismo que permitía que un candidato se inscribiera para las primarias con el patrocinio de al menos seis legisladores de la Concertación. La decisión apuntaba a repetir la exitosa experiencia de 1999 cuando la concertación había celebrado primarias con múltiples candidatos. En ese contexto, el diputado socialista Marco Enríquez- Ominami, fue el primero que oficialmente anunció su intención de contender en las primarias. Sin embargo, el procedimiento inicial de nominación de candidatos a las primarias fue descartado. El liderazgo de la concertación promovió un nuevo cambio en las reglas del juego.

En efecto, las cúpulas de los partidos de la coalición decidieron que en caso de celebrarse, las primarias se realizarían entre candidatos nominados por cada uno de los cuatro partidos de la Concertación. El cambio de las reglas de juego otorgó más poder sobre la selección del candidato presidencial de la coalición gubernamental a los liderazgos partidistas. Los partidos decidirían los nombres de los aspirantes e incluso existió la posibilidad de que podrían también negociar con el propósito de designar un candidato único sin necesidad de efectuar primarias. Las variaciones introducidas estrictamente favorecían la candidatura del ex presidente Frei. Ante el reclamo de desarrollar primarias abiertas, la concertación obstaculizó el proceso haciendo caso omiso de la necesidad de renovación y competencia (Espinoza, Morales y Perelló, 2009).

Las cúpulas de tres de los cuatro partidos integrantes de la Concertación, Partido Democracia Cristiana (DC), Partido Socialista (PS) y Partido Por la Democracia (PPD), terminaron nominando a Frei Ruiz-Tagle su candidato presidencial, pero el Partido Radical Socialdemócrata (PRSD), nominó al senador José Antonio González, forzando la realización de unas primarias para las que se acordaron un grupo de reglas que pusieron de manifiesto que se trataba de un proceso electoral interno parcial, regionalmente limitado, rápido y favorable a la candidatura de Frei.

De esa forma, mediante un particular sistema de primarias, Frei fue proclamado como el único abanderado de la coalición oficialista (Espinoza, Morales y Perelló, 2009). La cúpula de la Concertación negoció unas reglas de primarias que hacían prácticamente imposible una derrota de Frei. La primaria de 2009, "en lugar de transformarse en un proceso abierto y participativo, reeditó las decisiones cupulares y el encapsulamiento de las élites de los partidos" (Contreras, 2010: 145).

El efecto sobre la unidad de la Concertación se hizo sentir. Como consecuencia, en primer lugar, se hicieron públicas las confrontaciones entre los máximos dirigentes de la Concertación, especialmente entre el partido del aspirante que enfrentó a Frei Ruiz-Tagle en el simulacro de primarias (PRSD) y el liderazgo del PS. El liderazgo del PS acusó al PRSD de tener interés en resquebrajar la unidad de la coalición, dando lugar a que el PRSD se excluyera de participar en las reuniones de los líderes partidarios de la Concertación hasta que el presidente del PS, Camilo Escalante, no ofreciera disculpas públicas. En segundo lugar, el diputado socialista Marco Enríquez-Ominami renunció a su partido y lanzó su candidatura presidencial como independiente (Contreras, 2010). En tercer lugar, el diputado socialista Jorge Arrate, también renunció a su organización y se convirtió en candidato presidencial de la izquierda extraparlamentaria. "Decepcionado por la forma en que el Partido Socialista llevaba a cabo la selección de su candidato presidencial, Arrate renuncia al partido, y posteriormente, es elegido como candidato de la coalición de izquierda Juntos Podemos" (Garrido, 2010: 123).

El proceso de nominación del candidato presidencial tuvo efectos desfavorables para la eventual continuidad de la coalición gubernamental. Los esfuerzos cupulares por presentar un candidato único en realidad

generaron dos candidatos adicionales que contendieron paralelamente a la coalición. Debido a que la equidad y competitividad de las primarias de la coalición de gobierno fue puesta en duda por referentes de la propia Concertación, los principales actores insatisfechos crearon o se integraron en otras organizaciones con el propósito de atraer a la mayor parte del votante oficialista y lograr pasar a la segunda vuelta.

La primera vuelta electoral, por consiguiente, se transformó también en una especie de primaria oficialista sumamente disputada. El elector pro gubernamental se vio obligado a elegir entre tres alternativas oficialistas que, además, compitieron entre sí con particular dureza. Con vistas a la eventual segunda vuelta quedó comprometido el proceso de cicatrización de las heridas que mutuamente se infligieron.

Aprobación presidencial de Michelle Bachelet (2006-2010)

La dinámica de la aprobación de la presidenta durante su mandato evidenció en los primeros dos años de su gobierno, que la mandataria tuvo que lidiar con caídas en la aprobación de su gestión, debido a asuntos cuya solución se había continuamente aplazado por los gobiernos de centroizquierda, como la gratuidad de la educación básica y decisiones fallidas en torno a servicios como el mejoramiento del transporte urbano. La recuperación llegó hacia finales de 2008. A partir de ese momento, las altas evaluaciones a su gestión (superiores al 60%) la acompañarían hasta el final de su mandato.

Durante el cuatrienio que duró la gestión, los principales puntos de conflicto como de inflexión de la aprobación de la mandataria fueron: 1) las protestas estudiantiles de mayo y junio de 2006: 2) los problemas con la implementación del nuevo sistema de transportes en Santiago, el Transantiago, en 2007: 3) la reforma del sistema de pensiones de 2008: 4) y de manera general, la decisión de Bachelet de mantener una férrea disciplina fiscal durante los años del *boom* de los precios del cobre, resistiendo presiones de todos los sectores políticos que pedían aumentar el

gasto, lo que dio márgenes de maniobrabilidad al estado chileno una vez que estalló la crisis económica mundial de 2008.

En ese sentido, la mandataria defendió una política fiscal austera que permitió la acumulación de grandes reservas estatales en dos fondos soberanos en el exterior. Luego cuando el país enfrentó la severa crisis económica causada por variables externas, la aprobación de Bachelet despegó a niveles inéditos en el Chile post Pinochet (superiores al 70%). Aunque Bachelet no podía competir por la reelección sucesiva, todo indicaba que el candidato presidencial que contara con el apoyo de la popular presidenta tenía una ventaja considerable con respecto a sus rivales (Navia y Cabezas, 2010; Morales y Navia, 2010).

Cuadro 4. Dinámica de la aprobación de la presidenta Michelle Bachelet (2006-2010).

Mes y año	Popularidad
Diciembre 2006	52%
Junio 2007	41%
Diciembre 2007	39%
Junio 2008	40%
Diciembre 2008	43%
Junio 2009	67%
Octubre 2009	78%

Fuente: Elaboración propia con datos de Encuestas CEP (2009).

La primera y segunda vueltas electorales

En la primera vuelta de los comicios presidenciales de 2009 en Chile se presentaron cuatro candidatos: 1) Eduardo Frei Ruiz-Tagle, representando a la coalición gubernamental "Concertación de Partidos por la Democracia". 2) Marco Enríquez-Ominami, como candidato independiente. 3) Jorge Arrate, por el Partico Comunista. 4) Sebastián Piñera, por la centroderechista Coalición por el Cambio.

La dinámica errática seguida por el proceso de selección del candidato presidencial de la Concertación tuvo su reflejo en los resultados electorales de esa primera fase. El candidato de centro derecha Sebastián Piñera ganó esa instancia con un resultado que lo situó con grandes probabilidades de repetir su triunfo en la segunda etapa. Mientras Piñera obtuvo 44.06%, el candidato presidencial de la Concertación, Frei Ruiz-Tagle sumó 29.6%, una votación muy por debajo del promedio histórico de la Concertación. Por su parte, el candidato independiente Enríquez-Ominami obtuvo un respaldo electoral equivalente al 20.1% de los votos, el mejor resultado alcanzado por un candidato de su tipo en una elección presidencial chilena posterior a la etapa pinochetista, en tanto Jorge Arrate sumó el 6.2% (Servel).

Aunque el conjunto de los votos obtenidos por los candidatos presidenciales de centro izquierda e izquierda en primera vuelta, Frei Ruiz -Tagle, Enríquez-Ominami y Arrate, superaba la votación obtenida por el concursante de centro derecha, Sebastián Piñera (55.9% contra 44.05%), la división oficialista no pudo ser resuelta tampoco en la segunda fase de los comicios.

> En la primera fase de la campaña, incluso, Enríquez-Ominami fue sustantivamente más agresivo con Frei que con el propio Piñera. Criticó ácidamente su gobierno, cuestionó la altura moral de Frei en caso de que llegara nuevamente al poder y formó una lista parlamentaria que tenía por objetivo desbancar a algunas figuras de la Concertación. Este escenario de competencia en la Concertación terminó por favorecer a Piñera (Morales y Sánchez, 2010: 58).

A cinco días de tener lugar la elección definitiva, Enríquez-Ominami[23] hizo un débil llamado a votar, según sus propias palabras, "por el candidato del 29%" (Frei Ruiz-Tagle), acto que lo que dejó bien claro fue la falta de convicción política en respaldar al candidato de la Concertación.

23 Ocho años después, concluida la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2017 en Chile, Enríquez-Ominami reconocería que en los comicios de 2009, él jamás se pronunció de forma rápida, tajante y clara a favor del candidato presidencial de la Concertación (La Tercera, 2017). De cualquier forma, la ruptura, el enfrentamiento, la crítica y luego la ausencia de espaldarazo a la candidatura de Frei Ruiz-Tagle, abonó no a favor de la cicatrización, sino que profundizó la división en las bases de apoyo del oficialismo.

> Finalmente, Enríquez-Ominami optó por votar por el entonces oficialismo, pero sin pedirles a sus adherentes que hicieran lo mismo. Como resultado, el 17 de enero de 2010, Piñera celebraba con sus seguidores el triunfo, anunciando una segunda transición que dejaba atrás los años de la Concertación y prometía un nuevo camino para Chile (López y Baeza, 2011: 291).

Aunque en la segunda etapa, Frei Ruiz-Tagle logró reducir de forma importante la diferencia que lo separó en la primera vuelta de Sebastián Piñera, de 15 a 3 puntos porcentuales, estudios sobre el comportamiento del traspaso de votos demuestran que la división oficialista entorpeció de forma decisiva ese proceso. Así por ejemplo, del 20.1% de votantes que respaldó a Enríquez-Ominami en la primera fase, sólo el 49% apoyó a Frei en segunda vuelta, el 21% votó por Piñera y el 29.7% votaría nulo o blanco (Osorio y Schulter, 2010).

> Piñera se vio favorecido por el contexto político de 2009. La división concertacionista fue un punto de inflexión para estas elecciones no sólo por la fuga de diputados y senadores del PS, PDC y PPD, sino también por la irrupción de Marco Enríquez-Ominami como candidato presidencial independiente. En la práctica, la Concertación compitió con dos candidatos cuyas bases electorales jamás sumarían en una segunda vuelta. De hecho, los votantes socialistas tenían tres opciones en esta elección presidencial: Eduardo Frei por la Concertación, Jorge Arrate (ex miembro de la Concertación y del PS) por el Juntos Podemos, y Marco Enríquez-Ominami (Morales y Sánchez, 2010: 57).

La falta de unidad manifiesta fue el factor decisivo que frustró las aspiraciones gubernamentales de conservar el poder, inhibiendo el proceso de transferencia de la alta popularidad del ejecutivo de turno en votos para la candidatura oficialista. Sin embargo, nuestro análisis no reflejaría la complejidad del caso objeto de estudio si pasáramos por alto que, en los comicios presidenciales de 2009 y 2010 celebrados en Chile también se manifestaron otros fenómenos potencialmente adversos a la candidatura gubernamental como la desaceleración económica, la unidad del bloque opositor de centro derecha y el hecho de que este último también dejó atrás su proximidad con la dictadura pinochetista.

Con respecto a esos factores, a los que podemos denominar confluyentes, es necesario apuntar que de algún modo se habían manifestado

también en los comicios presidenciales anteriores sin que alcanzaran por ello a comprometer la victoria de la coalición gubernamental. Por ejemplo, en los comicios presidenciales de 1999, cuando el entonces candidato de la concertación, Ricardo Lagos, contendió en un contexto electoral signado por una fuerte desaceleración económica durante los años finales del mandato de Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000), ello no impidió al oficialismo imponerse en las urnas.

Al mismo tiempo, aunque en 2009 y 2010, la situación económica no parecía favorable para la intención oficialista de retener el poder, pues como consecuencia del impacto de la crisis financiera mundial de 2008 la economía chilena había decrecido, el propio origen externo de la desaceleración económica permitió que la ciudadanía pudiera apreciar la política responsable de disciplina fiscal seguida por el gobierno de Bachelet en los años anteriores cuando el país promediaba altos niveles de crecimiento del producto interno bruto, convirtiéndose en detonante para el incremento exponencial de la popularidad (78%) de la mandataria concertacionista (Navia y Cabezas, 2010; Morales y Navia, 2010).

En efecto, la responsabilidad por la crisis económica generalmente proclive a reducir el respaldo electoral de los gobiernos, en el caso de los comicios presidenciales en Chile 2009 y 2010, como regla no fue endosada a la gestión oficialista. Las fuentes del estallido fueron de origen externo, mientras la desaceleración facilitó que los ciudadanos percibieran los beneficios de la política fiscal responsable seguida por la administración durante los años de bonanza.

Por último, otro factor eventualmente desfavorable a los propósitos oficialistas de retener el poder en los comicios presidenciales de 2009 y 2010, fue que la oposición de centro derecha presentó una alternativa democrática unida y también había dejado atrás su antigua proximidad con la dictadura pinochetista. Hay que recordar que, precisamente la cercanía y complicidad de la oposición con el régimen militar que asoló al país entre 1973 y 1989 constituyó, a nuestro modo de ver, el factor clave que contribuyó a que la mayoría de los ciudadanos racionales la identificara entonces como una alternativa gubernamental no creíble.

Sin embargo, a diferencia de los comicios de 1999, ya en las elecciones presidenciales celebradas durante 2005 y 2006 la oposición de centro

derecha había presentado mejores credenciales de compromiso con la democracia, sin que ello implicara el ascenso al poder. En esa ocasión su entonces también candidato presidencial, Sebastián Piñera, contribuyó a darle perspectiva democrática a esa fuerza, pues desde 1990 se había mostrado como un político más liberal, desligado por completo de Pinochet y su gobierno. Piñera mismo había votado NO en el plebiscito de 1988, donde se definió la continuidad del régimen pinochetista y durante la campaña de 2005 puso especial énfasis en sumar también a sus filas a antiguos adherentes de la coalición gubernamental de centro izquierda (Gamboa, 2006).

Por consiguiente, aunque los tres factores mencionados eventualmente adversos a la continuidad del oficialismo se hicieron presentes también en los comicios presidenciales de 2009 y 2010 en Chile, no alcanzaron a desempeñar el papel significativo que, en cambio, si tuvo la división manifiesta de la coalición gubernamental.

Conclusiones

Los resultados electorales de los partidos o coaliciones de gobierno en los comicios presidenciales celebrados en Chile a partir del retorno a la democracia, una vez contrastados con el nivel de aprobación registrado por los gobernantes de turno antes del inicio de las respectivas campañas, evidencian que en cuatro de las seis elecciones (1993, 2005-2006, 2013-2014 y 2018-2019) una alta popularidad del titular del ejecutivo fue seguida por el triunfo del oficialismo o en su defecto, una baja aprobación del gobernante de turno precedió su derrota.

En cambio, en dos de los seis comicios, la popularidad presidencial no anticipó el éxito o la derrota del partido o coalición de gobierno. El oficialismo emergió ganador en las elecciones presidenciales de 1999-2000, pese a que el mandatario de turno, Eduardo Frei Ruiz-Tagle exhibía una aprobación baja (28%), mientras en las elecciones de 2009-2010 la coalición gubernamental no pudo retener el poder a pesar de que era alta la popularidad de la titular del ejecutivo, Michelle Bachelet (78%).

La capacidad anticipatoria de la popularidad presidencial en la experiencia chilena posterior al retorno de la democracia se puso de mani-

fiesto en 2/3 de los casos, lo que confirmaría la pauta reportada por Echegaray (1996) y Díaz (2019) acerca de que en los comicios presidenciales latinoamericanos la asociación entre popularidad presidencial y éxito o derrota del partido en el gobierno tiende a ser consistente. Teniendo en cuenta a su vez que la popularidad presidencial tiende a reflejar de manera general la percepción que los ciudadanos tienen del desempeño del partido en el gobierno, el hallazgo apunta a confirmar el potencial explicativo de la concepción downsiana acerca de que el desempeño del partido en el gobierno es la clave del desenlace electoral.

El análisis de los dos casos en que la relación entre la popularidad del mandatario de turno y el resultado electoral del partido o coalición de gobierno fue inconsistente, arroja que en los comicios presidenciales chilenos posteriores al retorno a la democracia en 1990 dos condiciones han sido capaces de anular la asociación entre la aprobación del ejecutivo y el éxito o derrota del partido o coalición gubernamental.

La alta aprobación de la titular del ejecutivo en 2009 no se tradujo en éxito para el oficialismo, debido a que durante la campaña la unidad del oficialismo se vio severamente afectada por un proceso de división interna que dispersó el voto pro-gubernamental, elevando los costos y tiempos de una eventual reunificación del mismo con miras a encarar la segunda vuelta electoral. En cambio, la baja aprobación del mandatario de turno en 1999 no derivó necesariamente en una pérdida del poder por parte del oficialismo como consecuencia de que la oposición no constituía entonces una opción de gobierno creíble y por tanto, resultó incapaz de ganarse la confianza y los votos de la mayoría de los ciudadanos.

El efecto más notable tanto de la división del oficialismo como del carácter no creíble de la oposición parece ser el de conseguir situar al candidato presidencial del partido o coalición de gobierno en una situación de ventaja o de desventaja crucial, posiblemente desde antes de iniciarse la campaña presidencial.

La identificación de que la capacidad anticipativa de la popularidad presidencial puede ser anulada por la división del partido en el gobierno y por el hecho de que la oposición no constituya una alternativa de gobierno creíble, apuntaría a su vez a confirmar la validez de la concepción de Panebianco (1986) referente a la importancia de la cohesión interna de los partidos, y la de Downs (1973) relativa a las implicaciones negati-

vas que tiene para los partidos de la oposición constituir una opción de gobierno no creíble para la mayoría de los ciudadanos racionales.

Por último, los resultados arrojados por el análisis del caso de Chile abren la puerta a futuras comprobaciones de la consistencia que podrían o no mostrar esos mismos factores en la experiencia específica de otros países de la región con respecto a la asociación entre la popularidad presidencial y el éxito o la derrota del partido en el gobierno.

Si la consistencia de la asociación entre la aprobación presidencial y el éxito o derrota del partido en el gobierno en América Latina se ve afectada por la acción de un grupo de factores atribuibles a las condiciones específicas de los regímenes presidenciales de la región, es imprescindible, a efectos de una eventual generalización que enriquezca el saber politológico, no solo llegar a establecer la magnitud estadística del impacto, sino también lograr identificarlos con la debida precisión comprobando a su vez si esos factores son siempre los mismos o por el contrario son múltiples. El presente trabajo representa solo un pequeño paso en esa prometedora dirección.

Fuentes consultadas

Anduiza, Eva y Bosch, Agustí (2004). *Comportamiento político y electoral*. Barcelona: Ariel Ciencia Política.

Avendaño, Octavio (2009). "La oposición de derecha en Chile. El caso de la UDI en perspectiva comparada". Ponencia presentada al XXI Congreso Mundial de Ciencia Política. Santiago de Chile.

Beltrán, Ulises (2015). "El desacuerdo con los presidentes". Artículo disponible en http://www.nexos.com.mx/?p=24307

Berlemann, Michael y Enkelmann, Soren (2014). "The economic determinants of US presidential approval: A survey". *European Journal of Political Economy*, *36*, 41-54.

Bordieu, Pierre (1972). *La opinión p*ública no existe. Artículo disponible en; http://sociologiac.net/biblio/Bourdieu_OPE.pdf

Brody, Richard & Sigelman, Lee (1983). "Presidential popularity and presidential elections: An update and extensión". *Public Opinion Quarterly*, *47* (3), 325-328.

Buendía, Jorge (1996). "Economic reform, public opinion, and presidential approval in Mexico, 1988-1993". *Comparative Political Studies*, *29* (5), 566-591.

Carey, John C. (2002). "Parties, Coalitions, and the Chilean Congress in the 1990's". en Scott Morgenstern y Benito Nacif (eds.): *Legislative Politics in Latin America*. New York: Cambridge University Press, 222-253.

Cohen, Jeffrey E. (1999). *Presidential responsiveness and public policy-making: The publics and the policies that presidents choose*. Ann Arbor: University of Michigan Press.

Contreras, Gonzalo (2010). "Concertación de Partidos por la Democracia: razones de su éxito y factores de su derrota", en Mauricio Morales Quiroga y Patricio Navia (eds.): *El sismo electoral de 2009. Cambio y continuidad en las preferencias políticas de los chilenos.* Santiago: Ediciones Universidad Diego Portales. 145-164.

Converse, Philip E. (2006). "The nature of belief systems in mass publics" (1964). *Critical Review*, 18: 1-3, 1-74, DOI: 10.1080/08913810608443650

De Paula, André Jacomo (2013). *Os Enigmas da Popularidade Presidencial no Brasil: Economía e Política*? Tesis de Maestría. Brasilia: Universidad de Brasilia.

Díaz Rodríguez, Orestes Enrique (2019). *Popularidad presidencial y resultado electoral del partido o coalición de gobierno en América Latina*. Tesis doctoral. Guadalajara: Universidad de Guadalajara.

Díaz Rodríguez, Orestes Enrique (2019a). *Enigmas de la popularidad presidencial en América Latina*. Guadalajara: Universidad de Guadalajara.

Downs, Anthony (1973). *Teoría económica de la democracia*. Madrid: Aguilar.

Echegaray, Fabián (1996). "¿Voto económico o referéndum político? Los determinantes de las elecciones presidenciales en América Latina, 1982-1994". *Desarrollo Económico*, V.36 (142), 603-619.

Encuesta CEP (1999) Disponible en: https://www.cepchile.cl/cep/site/tax/port/all/taxport_20__5.html

Encuesta CEP (2009) Disponible en: https://www.cepchile.cl/cep/site/tax/port/all/taxport_20__3.html

España, Sergio (2002). "Una evaluación a las evaluaciones del Gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle", en Oscar Muñoz y Carolina Steffoni (coords.). *El período del presidente Frei Ruiz-Tagle: reflexiones sobre el segundo gobierno concertacionista*. Santiago: FLACSO-Editorial Universitaria, 17-42.

Espinoza, Alberto, Morales, Mauricio y Perelló, Lucas (2009). "Todo cambia: radiografía electoral de Frei y explicaciones de su derrota", en Mauricio Morales Quiroga y Patricio Navia (eds.): *El sismo electoral de 2009. Cambio y continuidad en las preferencias políticas de los chilenos*. Santiago: Ediciones Universidad Diego Portales, 79-97.

Fiorina, Morris P. (1981). *Retrospective Voting in American National Elections*. New Haven: Yale University Press.

Finkel, Steven E. (1993). "Reexamining the 'minimal effects' model in recent presidential campaigns". *The Journal of Politics*, *55* (1), 1-21.

Gamboa, Ricardo y Segovia, Carolina (2006). "Las elecciones presidenciales y parlamentarias en Chile, diciembre 2005-enero 2006". *Revista de Ciencia Política (Santiago)*, *26* (1), 84-113. https://dx.doi.org/10.4067/S0718-090X2006000100005

Garrido, Carolina (2010). "¿Quién vota por la izquierda? La intención de voto y el desempeño electoral de Jorge Arrate", en Mauricio Morales Quiroga y Patricio Navia (eds.): *El sismo electoral de 2009. Cambio y continuidad en las preferencias políticas de los chilenos*. Santiago: Ediciones Universidad Diego Portales, 123-144.

Gramacho, Wladimir (2007). *Popularidad gubernamental, economía y partidos políticos en Brasil: Un test crucial para las teorías de las pistas partidistas*. Tesis doctoral (publicada). Salamanca: Universidad de Salamanca.

Gronke, Paul y Newman, Brian (2003). "FDR a Clinton, Mueller a?: Un ensayo de campo sobre la aprobación presidencial". *Investigación Política Trimestral*, 56 (4), 501-512.

Habermas, Jürgen (1998). *Facticidad y validez: sobre el derecho y el Estado democrático de derecho en términos de teoría del discurso*. Madrid: Trotta,

Huneeus, Carlos (2000). "Los cambios institucionales al sistema económico durante la transición a la democracia en Chile: Del neoliberalismo a la economía social de mercado". *Revista de Ciencia Política (Santiago)*, 20 (2), 103-130.

Huneeus, Carlos (2001). *La derecha en el Chile después de Pinochet: el caso de la Unión Demócrata Independiente*. Notre Dame: The Helen Kellogg Institute for International Studies.

Huneeus, Carlos (2007). *Las consecuencias del caso Pinochet en la política chilena*. Santiago: Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea.

Joignant, Alfredo (2003). "La democracia de la indiferencia. Despolitización, desencanto y malestar en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle", en Oscar Muñoz y Carolina Steffoni (coords.) *El período del presidente Frei Ruiz-Tagle. Reflexiones sobre el segundo gobierno concertacionista*. Santiago: FLACSO-Editorial Universitaria, 83-106.

Kenney, Patrick J. y Rice, Tom W. (1983). "Popularity and the Vote: The Gubernatorial Case". *American Politics Quarterly*, 11 (2), 237-241.

Kernell, Samuel (2006). *Going public: New strategies of presidential leadership*. Thousand Oaks, CA: CQ Press.

King, Gary C. (1993). "The Methodology of Presidential Research" en George C. Edwards III, John H. Kessel y Bert A. Rockman (eds.). *Researching the Presidency: Vital Questions, New Approaches*. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 387-412.

Lewis-Beck, Michael S. y Rice, Tom (1982). "Presidential popularity and presidential vote". *Public Opinion Quarterly*, 46 (4), 534-537.

Lewis-Beck, Michael S., y Rice, Tom (1984). "Forecasting presidential elections: A comparison of naive models". *Political Behavior*: 6 (1), 9-21.

Lewis-Beck, Michael S. y Stegmaier, Mary (2000). "Economic determinants of electoral outcomes". *Annual Review of Political Science*, 3 (1), 183-219.

López Varas, Miguel Ángel y Baeza Freer, Jaime (2011). "Las elecciones chilenas de 2009-10: ¿se derechizó el país?", en Manuel Alcántara

(ed.): *América Latina: Política y elecciones del bicentenario (2009-2010)*, Salamanca: Ediciones de la Universidad de Salamanca, 277-302.

Magaloni, Beatriz (2006). *Voting for autocracy: Hegemonic party survival and its demise in Mexico.* Cambridge: Cambridge University Press.

Mair, Peter y Katz, Richard (2002). "The ascendancy of the party in public office: Party organizational change in twentieth-century democracies", en Richard Gunther, José Ramón Montero y Juan J. Linz (eds.): *Political Parties. Old Concepts and New Challenges.* Oxford: Oxford University Press, 113-136.

Morales, Mauricio y Sánchez, María José (2010). "La segunda es la vencida: Piñera y sus bases de apoyo", en Mauricio Morales Quiroga y Patricio Navia (eds.): *El sismo electoral de 2009. Cambio y continuidad en las preferencias políticas de los chilenos.* Santiago: Ediciones Universidad Diego Portales, 57-78.

Morales, Mauricio y Navia, Patricio (eds.) (2010). *El sismo electoral de 2009. Cambio y continuidad en las preferencias políticas de los chilenos*. Santiago: Ediciones Universidad Diego Portales.

Moreira, Constanza (2006). "Sistemas de partidos, alternancia política e ideología en el cono sur (Argentina, Brasil, Chile y Uruguay)". *Revista Uruguaya de Ciencia Política*, *15*(1), 31-56. Recuperado el 25 de noviembre 2019 de: http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-499X2006000100003&lng=en&tlng=pt.

Mueller, John E. (1970). "Presidential Popularity from Truman to Johnson". *American Political Science Review*, 64 (1), 18-34.

Mueller, John E. (1973). *War, Presidents, and Public Opinion*. New York: Wiley.

Nannestad, Peter y Paldam, Martin (1994). "The VP-function: A survey of the literature on vote and popularity functions after 25 years". *Public Choice*, 79 (3-4), 213-245.

Navia, Patricio (2000). "Las presidenciales de 1999 en Chile: ¿Hay un nuevo electorado?", en *Anuario Social y Político de América Latina. (*Número 3), Santiago: FLACSO. Disponible en http://patricionavia.com/papers/anuario2000.PDF

Navia, Patricio (2009). "Encuestas, desempeño presidencial y preferencias electorales, 1990-2007", en *La sociedad de la opinión. Reflexiones sobre encuestas y cambio político en democracia*. Santiago: Ediciones UDP, 113-119.

Navia, Patricio y Cabezas, José Miguel (2010). "Aprobación presidencial en el cuatrienio de Bachelet", en *Chile 2009: Percepciones y Actitudes Sociales*. Santiago: Ediciones UDP, 17-26.

Navia, Patricio y Joignant, Alfredo (2000). "Las elecciones presidenciales de 1999: la participación electoral y el nuevo votante chileno". Francisco Rojas (ed). Chile 1999-2000. Nuevo Gobierno: Desafíos de la reconciliación. Santiago: FLACSO, 119-144.

Navia, Patricio y Rojas Morales, Priscila (2008). "El efecto de la participación electoral en las primarias para la elección presidencial de 1999 en Chile". *Postdata* (13), 193-222. Recuperado el 29 de octubre de 2018 en:

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-96012008000100008&lng=es&tlng=en

Neustadt, Richard E. (1991). *Presidential power and the modern presidents: The politics of leadership from Roosevelt to Reagan*. New York: Simon and Schuster.

Osorio, Rodrigo y Schuster, Martin (2010). "Marco Enríquez-Ominami: el candidato independiente", en Mauricio Morales Quiroga y Patricio Navia (eds.): *El sismo electoral de 2009. Cambio y continuidad en las preferencias políticas de los chilenos*. Santiago: Ediciones Universidad Diego Portales, 99-122.

Page, Benjamin I. y Shapiro, Robert Y. (2010). *The rational public: Fifty years of trends in Americans' policy preferences*. Chicago: The University of Chicago Press.

Panebianco, Angelo (1986). *Modelos de partidos*. Madrid: Alianza Editorial

Romero, Vidal (2000). "Impacto de la evaluación de políticas públicas en la aprobación presidencial". SSRN Electronic Journal.
DOI: 10.2139/ssrn.1963854.

Romero, Vidal (2009). "La herencia del presidente: Impacto de la aprobación presidencial en el voto". *Política y Gobierno*. XVI (1), 3-35.

Sartori, Giovanni (1992). *Elementos de Teoría Política*. Madrid: Alianza Editorial.

Sartori, Giovanni (2003). *Ingeniería Constitucional Comparada*. México: FCE.

Sartori, Giovanni. (2005). *Partidos y sistemas de partidos*. Madrid: Alianza Editorial.

Servicio Electoral República de Chile. Disponible en: https://historico.servel.cl/

Siavelis, Peter. (2004). "Sistema electoral, desintegración de coaliciones y democracia en Chile: ¿El fin de la Concertación?". *Revista de Ciencia Política (Santiago)*, 24 (1), 58-80. https://dx.doi.org/10.4067/S0718-090X2004000100003

Siavelis, Peter (1997). "Continuity and Change in the Chilean Party System: On the Transformational Effects of Electoral Reform". *Comparative Political Studies.* 30 (6): 651-674.

Sigelman, Lee (1979). "Presidential Popularity and Presidential Elections". *Public Opinion Quarterly*, 43 (4), 532-534.

Somuano, María Fernanda (2018). "Aprobar al presidente. Una comparación entre Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto". *Foro Internacional*, 58(4), 629-670.

Stimson, James A. (2004). *Tides of Consent: How Opinion Movements Shape American Politics.* Cambridge: Cambrigde University Press.

Tagina, María Laura (2008). "El rompecabezas de la conducta electoral. Enfoques alternativos y debates actuales". *Anuario de Investigaciones*. Departamento de Derecho y Ciencia Política. Universidad Nacional de La Matanza, 119-146.

Zaller, John R. (2014). *La naturaleza y los orígenes de la opinión pública*. Madrid: CIS.

Zúñiga Urbina, Francisco y Gutiérrez Moya, Carlos (2000). "Crónica de la elección presidencial en Chile". *Revista de Derecho Político*, (47), 289-307.